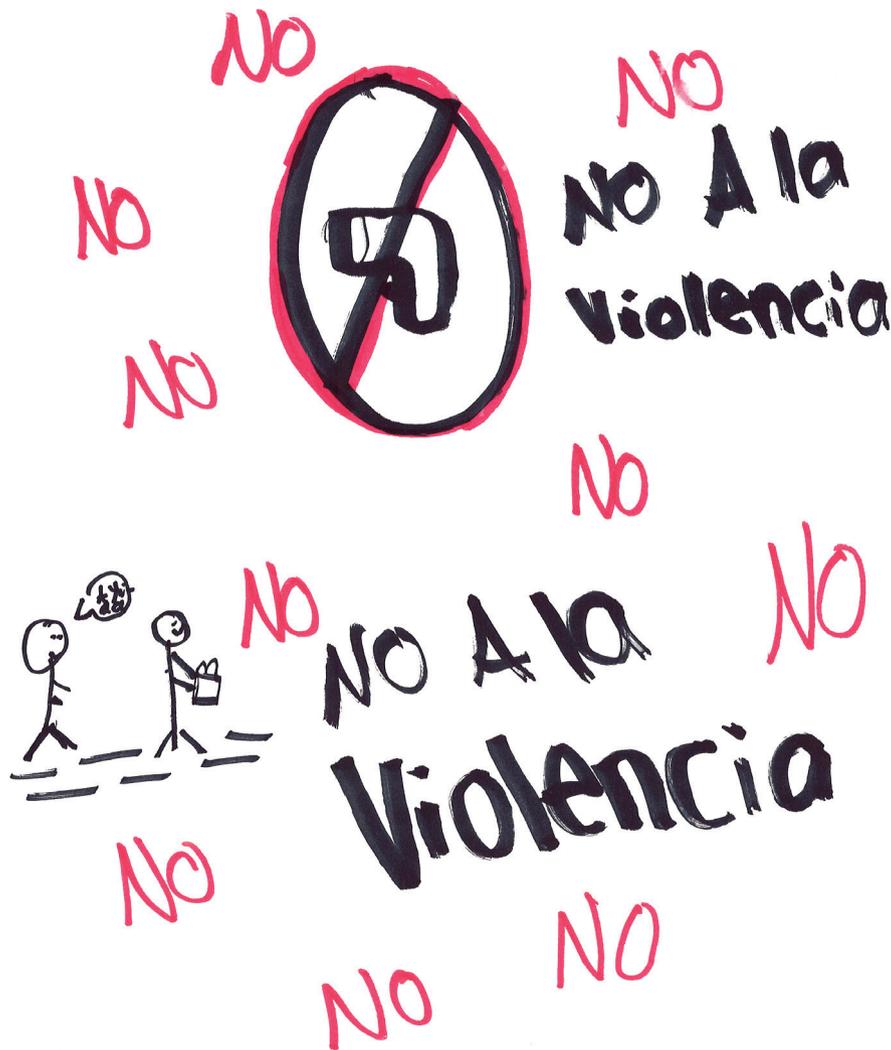




# Conviviendo con Violencia Armada

Un Estudio a Nivel Comunitario sobre Violencia Armada y el Uso Indebido de las Armas Pequeñas y Ligeras en el Triángulo Norte de Centroamérica.



*Dibujo por un joven participante de Guatemala representando una comunidad libre de violencia.*



Fecha de publicación: 26-06-2020

Las consultas relacionadas con esta publicación deberán dirigirse a:

The HALO Trust, Carronfoot, Thornhill, DG35BF

Investigadora y autora: Sofía Martínez Fernández

Editor: Phil Paterson

Funcionarios de Enlace con la Comunidad:

Victoria Celeste Aldana Morales (Guatemala)

Pedro Jesús Velásquez (Honduras)

Blas Alexander Salazar Flores (El Salvador)

Agradecimientos

The HALO Trust quisiera agradecer a Suiza por su apoyo al proyecto de investigación, y a las muchas personas de todos los países del Triángulo Norte por haber prestado su tiempo para este proyecto. Agradecemos especialmente a las mujeres, padres, niños y jóvenes de Guatemala, Honduras y El Salvador que participaron en las entrevistas grupales y compartieron sus testimonios, así como a las ONG locales IEPADES (Guatemala), Buenas Acciones Honduras y Tutela Legal (El Salvador) por facilitar encuentros con víctimas.

Todas las imágenes dibujadas a mano fueron elaboradas en talleres realizados con niños como parte de esta investigación.

# Resumen Ejecutivo

Este informe de The HALO Trust nace de la necesidad de entender mejor cómo las comunidades vulnerables, en particular las mujeres, niños y jóvenes, se ven afectadas por el uso indebido de armas pequeñas en la región del Triángulo Norte de Centroamérica (formada por Guatemala, Honduras y El Salvador). El objetivo principal de este documento es orientar futuras iniciativas de reducción y prevención de violencia en la región aportando evidencia sobre las necesidades de quienes viven en comunidades afectadas por esta lacra, con el fin de promover esfuerzos mejor informados y basados en las necesidades y derechos de las víctimas. Un equipo formado por una consultora de investigación y tres oficiales de enlace con la comunidad basados en la región llevaron a cabo una amplia investigación en Guatemala, Honduras y El Salvador entre junio y agosto de 2019, cuyos resultados se presentan en este informe.

La metodología de investigación se basó en 22 entrevistas grupales con 140 miembros de comunidades vulnerables en los tres países que fueron seleccionadas por sus altos niveles de violencia armada. El perfil de los participantes fue en su mayoría mujeres, niños, jóvenes y familias. Durante las entrevistas los participantes trataron temas como la violencia armada en su comunidad; la victimización por parte de grupos criminales; sus percepciones de inseguridad; la confianza en instituciones públicas; así como posibles soluciones al problema de la inseguridad. Para respaldar los testimonios de las comunidades, el equipo

de investigación llevó a cabo más de 50 entrevistas semiestructuradas con actores relevantes, incluyendo expertos en seguridad y violencia a nivel comunitario, diplomáticos, responsables de políticas públicas, periodistas, ONG locales, policías, trabajadores sociales, líderes comunitarios y médicos.

La primera sección del informe consiste en una revisión bibliográfica de las dinámicas regionales sobre violencia armada y armas pequeñas desde una perspectiva política e histórica. En la segunda sección se presentan los hallazgos más relevantes de las entrevistas con expertos sobre las dificultades de vivir en zonas de alto riesgo. Esta sección complementa y enriquece los hallazgos de los testimonios comunitarios, que se discuten en la tercera parte del informe.

Aunque el equipo de investigación identificó problemas transversales en las conversaciones con comunidades en Guatemala, Honduras, y El Salvador, los resultados de las entrevistas aparecen separadas por país con el fin de facilitar la lectura. Por último, en la cuarta sección se exploran posibles soluciones a nivel nacional y regional.

Las conclusiones más relevantes de este informe sobre armas pequeñas y su impacto en las comunidades de alto riesgo de Guatemala, Honduras y El Salvador son las siguientes:

- El vínculo entre las armas pequeñas y la violencia letal en el Triángulo Norte es significativo. Entre 2013 y 2018, el 80% de todas las muertes violentas en

Guatemala, Honduras y El Salvador se cometieron con un arma de fuego; el 89% de las víctimas mortales fueron hombres, de los cuales el 42% tenían entre 18 y 29 años y casi el 10% eran niños o adolescentes; el 60% de todos los supervivientes de incidentes violentos fueron heridos con un arma de fuego.

- A pesar del vínculo entre las armas de fuego y las tasas de homicidios, los gobiernos de la región, por lo general, han tratado el control de armas como un asunto separado de los planes de seguridad más amplios. Guatemala tiene una sección dedicada a las armas de fuego en su estrategia de prevención de la violencia, a diferencia de Honduras y El Salvador.
- La revisión bibliográfica de este informe muestra que los particulares y empresas de seguridad privada poseen en promedio el 73% del número total de armas de fuego registradas en la región (aproximadamente 1,8 millones). Según cifras oficiales hay 149.030 armas de fuego legales en El Salvador; 585.405 en Guatemala; y 93.706 en Honduras.
- Los entrevistados que viven y trabajan en comunidades afectadas por la violencia denunciaron que en esas zonas hay una gran disponibilidad de armas ilegales, principalmente debido a: una gran demanda derivada de la percepción de inseguridad; los débiles mecanismos de control

de armas; y las deficiencias de los procesos de desarme que se produjeron luego de las guerras civiles en la región. Según uno de los entrevistados en Guatemala, un arma ilegal cuesta tan sólo 130 dólares en el mercado negro, y una sola bala puede costar sólo 0,13 dólares.

- Los grupos criminales son los que más se benefician de la violencia en las comunidades. Las pandillas callejeras, muy presentes en zonas urbanas de la región, ejercen un estricto control territorial en los barrios que ocupan, limitando la libre circulación de personas. Ese control es posible gracias a que poseen un considerable arsenal de armas, financiado principalmente mediante la extorsión. Según testimonios recogidos en esta investigación, es común ver a pandilleros de tan sólo 12 años portando escopetas en la entrada de algunos barrios en El Salvador. Más que para matar, varios entrevistados coinciden en que el principal objetivo por el que las pandillas portan armas de fuego es para causar miedo entre la población.
- Aunque a nivel regional los hombres son más vulnerables a la violencia homicida que las mujeres, ellas acaban siendo víctimas colaterales. Varias de las participantes aseguraron que en su comunidad muchas mujeres sufren otros tipos de violencia, como el abuso físico y sexual, que suelen preceder a un feminicidio. A menudo,



*Un estudiante de Guatemala representa su vida cotidiana en su barrio con un dibujo de dos personas peleando.*

los abusos son perpetrados por sus parejas sentimentales.

- Para aquellos que trabajan y viven en zonas controladas por pandillas, el miedo es parte de la vida cotidiana. Víctimas entrevistadas aseguran sentirse vulnerables tanto frente a estos grupos criminales como a la policía, cuyos operativos en comunidades a veces acaban victimizando a jóvenes por sus supuestos vínculos con pandillas. Esto ha provocado graves problemas de salud mental entre los jóvenes que viven en zonas de alta criminalidad, tal y como muestran los testimonios de participantes comunitarios y expertos.
- Las víctimas entrevistadas hablaron abiertamente sobre la

presencia de armas de fuego en sus vecindarios, aunque nunca se les preguntó directamente sobre el tema. La mayoría de los niños y adolescentes de Guatemala y Honduras consideraban las armas como instrumentos más eficaces para la autodefensa y admitieron haber tenido en sus manos armas de fuego en alguna ocasión. Los participantes más jóvenes mostraron un amplio conocimiento de las armas y sus calibres, llegando a describir con precisión describieron los tipos de armas y municiones.

- Los agentes de policía entrevistados describieron un fenómeno paradójico en algunas comunidades controladas por pandillas. Muchos de los vecinos afectados

consideran a las pandillas como protectores y no como amenazas, a pesar de que infligen un gran sufrimiento en sus comunidades. Esta relación con las pandillas se vio reflejada en los testimonios de algunos participantes en los tres países. Algunos sostuvieron que estos grupos tienen más autoridad en el vecindario que la policía. En general, los participantes mostraron desconfianza hacia los funcionarios y las autoridades policiales, reconociendo que se sentían vulnerables cuando patrullaban sus barrios.

- Todas las comunidades seleccionadas para esta investigación sufrían altas tasas de homicidios. Los participantes que viven en ellas aseguraron que los tiroteos y otras formas de extrema violencia son una parte normal de su vida cotidiana. Esta situación ha estigmatizado la comunidad, aseguran los entrevistados, y ha llevado a que exista una profunda desconfianza

entre los vecinos. Muchos participantes admitieron que se confinan en sus casas o en sus vecindarios para evitar el peligro.

- En los tres países, los participantes compartieron historias de otros miembros de la comunidad que habían decidido viajar a Estados Unidos indocumentados debido a la violencia en sus barrios. En su experiencia, las personas a veces ven la migración como su única opción.

Para reducir la violencia armada y proteger a los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños, este informe propone las siguientes recomendaciones:

- En Guatemala, el gobierno local debería ampliar la aplicación de los Consejos de Desarrollo Comunitario (COCODES), que promueven la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las políticas locales de prevención de violencia y crean espacios seguros para la interacción entre comunidades y autoridades públicas. Los donantes podrían apoyar este sistema que ya existe y que es considerado exitoso tanto por los participantes en la investigación comunitaria como por los funcionarios públicos entrevistados.
- En Honduras, el gobierno nacional debería continuar los esfuerzos actuales para reformar su policía nacional y reforzar su enfoque comunitario. La desconfianza social hacia la policía expresada por los participantes en Honduras



Un dibujo de un taller de investigación llamado "Mi perspectiva de la vida cotidiana en la comunidad" por un participante adolescente de Honduras.

- sugiere que los funcionarios podrían beneficiarse si recibieran más entrenamiento y apoyo en materia de derechos humanos y relaciones civiles. Estos esfuerzos no deberían ser opacados por iniciativas paralelas más próximas a la “mano dura”.
- En El Salvador, el Gobierno debería encontrar un equilibrio entre impulsar nuevas iniciativas de prevención de la violencia y mantener los enfoques exitosos de la policía comunitaria y los comités de prevención de la violencia impulsados por el gobierno anterior. Del mismo modo, no debe desistir de los programas que ofrecen a los jóvenes en situación de riesgo alternativas a la vida delictiva, como proyectos de rehabilitación y reinserción.
  - A nivel regional, las instituciones públicas en el Triángulo Norte deberían:
    - Aumentar sus inversiones en desarrollo y educación en las zonas de alto riesgo, ya que la falta de oportunidades es una de las causas principales de la violencia armada en los tres países.
    - Reconocer el problema de salud de emergencia resultante de la violencia armada y abordar el aumento de los gastos necesarios para apoyar los servicios de salud de emergencia mediante equipo de primeros auxilios, servicios de ambulancia y personal médico.
  - Educar a los niños y adolescentes sobre los peligros del uso indebido de armas mediante campañas de sensibilización sobre los riesgos.
  - Promover la cooperación regional en materia de control de armas y la vigilancia de su tráfico ilícito. Esto podría dar seguimiento a proyectos anteriores como el Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC), que fomentan una mayor participación de los grupos de la sociedad civil, y armonizan la legislación sobre armas de fuego de cada país con las normas internacionales.
  - Mejorar las capacidades técnicas y promover la transparencia en el registro de armas de fuego; mejorar la seguridad de los arsenales de armas para evitar su desviación; y proceder con la destrucción de los excedentes de armas.
  - Incluir un enfoque de género en las iniciativas de control de armas mediante la promoción de la participación de la mujer en los órganos de decisión relacionados con el control de armas; generar más datos desglosados por sexo; y contar con funcionarios especializados dedicados exclusivamente a abordar los casos relacionados con la violencia de género.



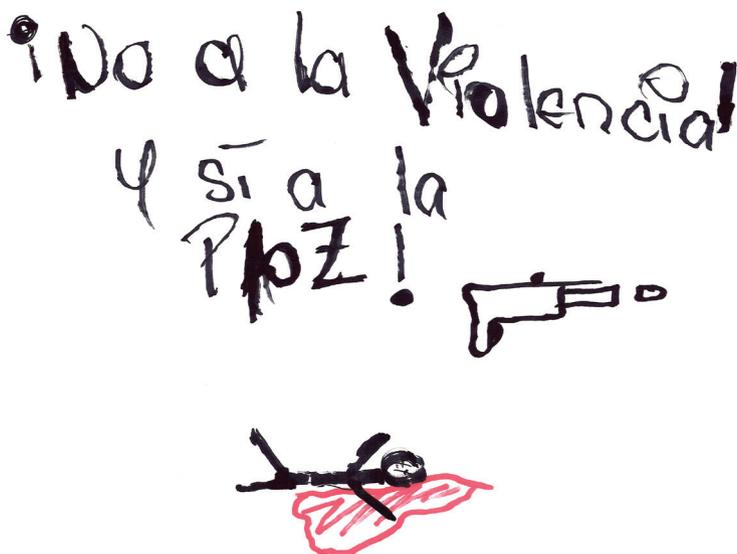
# Tabla de Contenido

<b>1. Armas y Violencia Letal en Guatemala, Honduras y El Salvador . . . . .</b>	<b>1</b>
1.1 Contextualización de la Violencia Armada . . . . .	1
1.2 Las Armas de Fuego y Los Civiles . . . . .	3
1.3 Políticas de Estado para la Reducción de la Violencia Armada . . . . .	6
<b>2. Testimonios de Expertos sobre Violencia a Nivel Comunitario. . . . .</b>	<b>9</b>
2.1 La Presencia de Armas en las Comunidades . . . . .	9
2.2 Las Armas y la Violencia de Pandillas . . . . .	10
2.3 Grupos Vulnerables: Violencia Letal contra los Jóvenes y las Mujeres	11
2.4 Aislamiento, Trauma y Miedo . . . . .	14
2.5 Relaciones entre la Comunidad y las Fuerzas de Seguridad. . . . .	15
2.6 Consecuencias Humanitarias de la Violencia Armada . . . . .	16
<b>3. Atrapados en el Fuego Cruzado . . . . .</b>	<b>18</b>
Trabajo de Campo . . . . .	18
3.1 Metodología . . . . .	18
3.2 Viviendo en Comunidades Afectadas por la Violencia. . . . .	20
3.2.1 Guatemala . . . . .	20
3.2.2 Honduras. . . . .	25
3.3.3 El Salvador . . . . .	27
<b>4. Soluciones a la Violencia Armada . . . . .</b>	<b>31</b>
4.1 Recomendaciones de la Investigación Comunitaria . . . . .	31
4.1.1 Guatemala . . . . .	31
4.1.2 Honduras. . . . .	32
4.1.3 El Salvador . . . . .	33
4.2 Recomendaciones Regionales . . . . .	35
4.2.1 Las Armas Pequeñas y la Agenda de Seguridad de la Región.	35
4.2.2 Prevención de la Violencia dentro de la Comunidad . . . . .	38
4.2.3 Protección de los Grupos Vulnerables . . . . .	41
4.2.4 La Policía Comunitaria . . . . .	43
<b>Conclusión . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>Referencias . . . . .</b>	<b>50</b>
<b>Anexos . . . . .</b>	<b>57</b>



# 1.

## Armas y Violencia Letal en Guatemala, Honduras y El Salvador.



Un dibujo de un taller de investigación llamado “Vivir en mi comunidad” por un joven participante de Guatemala.

### 1.1 Contextualización de la Violencia Armada

A pesar de que la región del Triángulo Norte de Centroamérica – formada por El Salvador, Guatemala y Honduras – lleva más de 25 años en paz, los expertos en seguridad han observado un cambio en la dinámica de la violencia que ha mutado de la brutalidad de la guerra a los altos niveles de criminalidad (Cruz, 2011; Pearce et. al., 2016). Entre 2013 y 2018, en la región fueron asesinados violentamente un total de 83.734 ciudadanos (Infosegura, 2019). Aunque su población solo representa el 0,44% de la mundial, en 2017 estos tres países acumularon el 2,63% del total de los asesinatos registrados en todo el mundo (UNODC, 2019a; Datos de libre acceso del Banco Mundial, 2019). En 2019 sus tasas de homicidio – que miden el número de homicidios por cada 100.000 habitantes – fueron de 22,4 en Guatemala; 40 en Honduras; y 51 en El Salvador, (Dalby y Carranza, 2018; InSight Crime, 2019).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Las tasas de homicidio per cápita son el instrumento de medición estándar de los gobiernos de la región para monitorear el progreso en la reducción de violencia. Históricamente, las tasas de homicidio en Guatemala, Honduras y El Salvador han sido significativamente superiores a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que considera las tasas superiores a 10 por 10.000 como “epidémicas” (Banco Mundial, 2016).

La desigualdad económica es una de las principales causas de la violencia en norte de Centroamérica, al igual que en América Latina en general (UNODC, 2019b). El Banco Mundial considera que las tasas de pobreza y de mortalidad materno-infantil de Guatemala se encontraban entre las más altas del hemisferio para finales de 2019 (Banco Mundial, 2019a). Esta institución también señala en sus perfiles de país que el 20% de los hondureños de las zonas rurales viven con menos de 2 dólares al día (Banco Mundial, 2019b). El Banco Mundial distingue una dinámica diferente en El Salvador por tener tasas de pobreza y desigualdad inferiores a las de Guatemala y Honduras, aunque también presenta un crecimiento económico mucho más lento que sus vecinos (Banco Mundial, 2019c). En un estudio de 2015 sobre seguridad ciudadana en América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identificó los factores socioeconómicos como una de las principales explicaciones del aumento de la delincuencia en la región. El informe menciona que los empleos de baja calidad y la falta de movilidad social contribuyen a los “delitos aspiracionales” en el contexto de un crecimiento económico impulsado por el consumo. Según el PNUD, la erosión del tejido social, el aumento de los hogares monoparentales y el crecimiento urbano acelerado también contribuyen a explicar las tasas desproporcionadamente altas de asesinatos violentos (PNUD, 2015, p. 7).

A su vez, la ONU y numerosas organizaciones locales identifican la corrupción y la impunidad como factores clave de las tasas criminalidad. La Fundación guatemalteca de derechos humanos Myrna Mack sugiere en un informe de 2017 que la impunidad tiene una correlación directa con la violencia en este país. Según esta organización, Guatemala tiene un historial de células criminales que operan dentro de las instituciones del Estado, lo que ayuda a explicar por qué el 94,20% de los delitos cometidos no resultan en un proceso judicial (Fundación Myrna Mack, 2017, p. 6). La antigua Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, que funcionó de 2007 a 2019, denunció repetidamente la vulnerabilidad de las instituciones guatemaltecas frente al crimen organizado (CICIG, 2019). La renombrada experta en corrupción Sarah Chayes observó patrones similares de corrupción endémica y vínculos entre las elites políticas y los grupos delictivos de Honduras que presuntamente alimentan la impunidad y perpetúan la violencia criminal en este país (Chayes, 2017).

Las tasas de homicidio han bajado a nivel regional desde 2015, aunque las dinámicas que explican de esta reduc-

*Peleas callejeras de Pandillas*



*Un estudiante de Guatemala muestra lo que es vivir en su barrio con un dibujo de una pelea de pandillas con cuchillos.*

ción varían de un país a otro. En Guatemala se ha registrado una disminución más gradual de las tasas de homicidio a partir de 2011, fenómeno que la CICIG atribuyó principalmente al éxito de las reformas de la policía y la justicia (CICIG, 2019). No está claro si la reducción sostenida de los homicidios en Honduras está relacionada con las acciones del gobierno, los cambios en las tendencias delictivas o ambos. El país ha estado en crisis desde la destitución del ex presidente Manuel Zelaya en 2009, lo que ha creado un vacío de poder que ha sido explotado por los grupos criminales, especialmente por los cárteles de la droga (International Crisis Group, 2019). El presidente hondureño Juan Orlando Hernández ha atribuido la disminución de los homicidios desde 2011 a las exitosas políticas de su gobierno, en particular a las extradiciones de cabecillas del narcotráfico y a un proceso de reforma policial (Risque, 2017). Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) considera que las disminuciones repentinas de los asesinatos como la observada en Honduras suelen ser el resultado de cambios en las dinámicas criminales, más que de nuevas políticas gubernamentales (UNODC, 2019c).

En El Salvador, las pandillas están presentes en alrededor del 80% del país (Martínez et al., 2016). Una polémica estrategia implementada en 2011 conocida como “la tregua” promovió un cese al fuego de las pandillas a cambio de mejores condiciones carcelarias para sus líderes, lo que resultó en una reducción inmediata de los asesinatos (Whitfield, 2013). La disminución de los homicidios después de 2015 fue paralela a una lógica de “guerra contra las pandillas” iniciada por el anterior gobierno de izquierdas del presidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, las pandillas reaccionaron a esta política matando a más de 5.000 personas ese año.

Desde entonces, los homicidios en El Salvador han venido bajando de forma significativa hasta llegar a niveles históricamente bajos a comienzos de 2020 bajo la administración actual. No existe consenso sobre el motivo de la drástica reciente reducción, aunque algunos analistas apuntan a un esfuerzo impulsado por los líderes de las pandillas en este país para mandar un mensaje de “buena voluntad” al gobierno de El Salvador (Valencia, 2019).

## 1.2 Las Armas de Fuego y los Civiles

El vínculo entre las armas pequeñas<sup>2</sup> y la violencia letal es especialmente fuerte en América Latina. Más del 50% de los asesinatos violentos en el

---

2 Según el Programa de Acción sobre Armas Pequeñas (PdA) de 2001, las armas pequeñas “son, en términos generales, armas diseñadas para uso individual. Incluyen, entre otras cosas, revólveres y pistolas de carga automática, rifles y carabinas, subfusiles, rifles de asalto y ametralladoras ligeras”. Las “armas pequeñas y ligeras” (APAL) también incluyen “armas diseñadas para ser usadas por dos o tres personas que trabajen en equipo (...)”. Dado que las armas ligeras rara vez se utilizan en la violencia armada en Centroamérica, el presente informe sólo se refiere a las armas pequeñas, sus municiones y accesorios. Para facilitar la lectura, en este informe se utilizan a propósito los términos “armas pequeñas”, “armas de fuego” y “armas” indistintamente, aunque sus definiciones técnicas sean diferentes. “Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Armas Pequeñas”, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/52/298, 27 de agosto de 1997.

mundo se cometen con armas de fuego, pero en las Américas esta cifra es de alrededor del 75% (UNODC, 2019d). En el Triángulo Norte, la proporción es aún mayor. Entre 2013 y 2018, alrededor del 80% de todas las víctimas de homicidio en Guatemala, Honduras y El Salvador fueron asesinadas con armas pequeñas; 89%<sup>3</sup> de las víctimas mortales fueron hombres, de los cuales el 42% tenían entre 18 y 29 años. Un porcentaje más pequeño, casi el 10%, eran niños o adolescentes. Alrededor del 60% de todos los sobrevivientes de incidentes violentos en la región fueron heridos con un arma de fuego (Infosegura, 2019).

Las armas de fuego no son la causa directa de la criminalidad en el Triángulo Norte, pero son un factor determinante en el ejercicio de la violencia (Banco Mundial, 2011). Como declaró la defensora de control de armas Rebecca Peters en una entrevista en El Salvador en 2010:

“[...] sabemos que las armas pequeñas no son necesariamente una causa de la violencia, pero multiplican la probabilidad de que una persona sea asesinada; multiplican la probabilidad de que varias personas mueran en lugar de una; y reducen la capacidad de resolver una situación de conflicto de manera no violenta” (Martínez, 2010).



*Durante un taller en Guatemala los participantes eligieron cómo se defenderían en escenarios peligrosos hipotéticos. Un niño muestra su elección: una pistola de juguete.*

La práctica de armar a los civiles, una característica fundamental de las guerras civiles de Guatemala (1960-1996) y El Salvador (1980-1992), contribuye a explicar la actual cultura de armas de fuego de la región. Cerca de un millón de civiles fueron armados durante los 36 años de conflicto en Guatemala (De León, 2006a, p. 41) y desde 1982, casi el 20% de la población masculina del país fue reclutada por el gobierno guatemalteco para formar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) para combatir la insurgencia guerrillera (De León, 2006b, p. 15). La Comisión de la Verdad de Guatemala, auspiciada por las Naciones Unidas, determinó que estos grupos fueron responsables de algunas de las peores violaciones de los derechos humanos durante el conflicto (Rothenberg y Comisión

3 Según el portal Infosegura, gestionado por el PNUD, las armas de fuego representan el 80,4% del total de homicidios en Guatemala; el 78,9% en Honduras; y el 78,3% en El Salvador.

Para El Esclarecimiento Histórico, 2012). En El Salvador, hay informes históricos que señalan que tanto las autoridades policiales como la guerrilla intimidaron a los civiles que se resistían a colaborar, obligándolos a unirse a la lucha armada (Gobierno del Canadá, 1989).

La región no puso en marcha procesos de desarme adecuado en el posconflicto. Según un libro de 2000 de la Universidad Centroamericana (UCA) sobre las armas de fuego en El Salvador, “[...] nadie sabe con certeza cuántas armas quedaron en manos de los civiles después de la guerra, y los esfuerzos institucionales para recogerlas fueron infructuosos y totalmente ineficaces” (Cruz, Beltrán, 2000, p. 23). Las escasas iniciativas de entrega de armas emprendidas por los civiles durante el posconflicto en Guatemala también se enfrentaron a muchos desafíos (De León, 2006b). Ambos países lanzaron campañas de amnistía de “armas por bienes” y “armas por juguetes” para crear incentivos para la entrega de armas, pero su impacto fue muy limitado (Gutiérrez, 1999).

Los desafíos inmediatos del posconflicto hicieron que aumentara la demanda de armas de fuego entre los ciudadanos, cuyas percepciones de inseguridad aumentaron (Cruz y Beltrán, 2000; De León, 2006b). Este tema fue capturado por el historiador nicaragüense Alejandro Bendaña:

“[...] el problema no son las armas, sino la percepción desesperada de que son una solución o un medio de supervivencia física y económica” (Bendaña, 1999, p. 174).

Michelle Melara, de la Fundación Arias de Costa Rica, explicó que la combinación de la criminalidad durante el posconflicto y la transformación de las instituciones de seguridad y justicia durante los años noventa creó incentivos para que los ciudadanos de clase media contrataran empresas privadas para proteger sus negocios y propiedades, multiplicando el número de armas de fuego en manos de civiles (Melara, 2003). La pujante industria de la seguridad privada empleaba a casi 84.000 personas a mediados de 2019, más que el número total de funcionarios de las autoridades policiales en los tres países juntos (aproximadamente 78.300).<sup>4</sup>

La mayoría de las armas que circulan hoy en día en el Triángulo Norte son propiedad de civiles. En un informe regional de 2019 sobre las armas pequeñas elaborado por el grupo de la sociedad civil salvadoreña Fundación

---

4 Cálculos a partir de las siguientes fuentes: Suchit Chávez, “Los dueños de la seguridad privada en Guatemala”, Plaza Pública, 10 de marzo de 2019, <http://bit.ly/2nrd0aq>; “Agencias privadas dirigen un ejército de 100.000 guardias”, La Prensa, 10 de junio de 2018 <http://bit.ly/2nZzVqo>; Jonathan Laguan, “¿Con cuántos policías cuenta la PNC para todo el territorio de El Salvador?”, La Prensa Gráfica, 26 de diciembre de 2017, <http://bit.ly/2oHEc2g>; Anna-Claire Bevan, “Guatemala renueva la Policía Nacional Civil ante el aumento del delito”, Diálogo Américas, 21 de agosto de 2013, <http://bit.ly/2nZAsso>; “Policía Nacional espera tener 20.000 agentes en 2019”, Presidencia de Honduras, comunicado de prensa, 2 de enero de 2019, <http://bit.ly/2nUTzny>; y J. R. Gómez Hecht, “Las agencias de seguridad privada en El Salvador”, Colegio de Altos Estudios Estratégicos, (San Salvador: 2014), <http://bit.ly/2nSsc3T>.

de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se citan cifras oficiales que muestran el siguiente número de armas de fuego registradas por civiles en cada país:

- 149,030 en El Salvador;
- 585,405 en Guatemala; y,
- 93,706 en Honduras (FESPAD, 2019, p. 19, 61,88).<sup>5</sup>

Según los datos del grupo de investigación con sede en Ginebra, Small Arms Survey, los ciudadanos y las empresas de seguridad privada de Guatemala, Honduras y El Salvador poseen en promedio el 73% del número total de armas de fuego registradas en la región que, según los mismos datos, sería de alrededor de 1,8 millones (Karp, 2018a). En comparación, los agentes de policía y los militares tendrían un promedio de 5,5% y 21,5% respectivamente en los tres países (Karp, 2018b, 2018c).<sup>6</sup>

### 1.3 Políticas de Estado para la Reducción de la Violencia Armada

En los últimos 20 años, tanto los gobiernos conservadores como los de izquierda del Triángulo Norte han basado sus estrategias de reducción de la violencia armada en políticas popularmente conocidas como de “mano dura” por su severidad hacia la delincuencia (Wolf, 2017). Según un informe de 2017 del International Crisis Group, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la prevención de conflictos, los planes de mano dura se caracterizan por un aumento del gasto en las autoridades policiales, una legislación más estricta, encarcelamientos masivos y el papel predominante de los militares en las funciones de seguridad pública (International Crisis

---

5 Es necesario especificar que las cifras de El Salvador y Guatemala incluyen las licencias de armas tanto de civiles como de empresas de seguridad. Es necesario especificar que las cifras de El Salvador y Guatemala incluyen las licencias de armas tanto de civiles como de empresas de seguridad.

6 Los datos originales del Small Arms Survey son tres anexos de datos con estimaciones mundiales de armas de fuego registradas, desglosadas por país y tipos de portador (civiles, agentes de policía, y los militares). Aunque no se especifica, HALO hizo la suposición, basados en estudios similares, de que los datos sobre los portadores de armas civiles para Guatemala, Honduras y El Salvador también incluyen las licencias de las empresas de seguridad privada. La cifra de 1,8 millones de armas de fuego registradas en los tres países se calculó sumando las cifras de las hojas de datos civiles, policiales y militares de Guatemala, Honduras y El Salvador, y aplicando luego los porcentajes para obtener las cifras regionales sobre el tipo de propiedad. Todos los cálculos se basaron en las siguientes fuentes:

- Karp, Aaron. “Anexo: Civilian Firearms Holdings, 2017”, en “Estimating Global Civilian-held Firearms Numbers”, Documento informativo de Small Arms Survey, Junio 2018a. <http://bit.ly/2ol7Hqv>.
- Karp, Aaron. “Anexo: Law Enforcement Firearms Holdings, 2017”, en “Estimating Global Law Enforcement Firearms Numbers”, Documento informativo de Small Arms Survey, Junio 2018b. <http://bit.ly/2nzoZjl>.
- Karp, Aaron. “Anexo: Military Firearms Holdings, 2017”, en “Estimating Global Military-owned Firearms Numbers”, Small Arms Survey Documento informativo de Small Arms Survey, Junio 2018c. <http://bit.ly/2oletN3>.

Group, 2017). En un análisis de las estrategias de mano dura en El Salvador, la experta en seguridad Jeannette Aguilar afirmó que su origen estaba más arraigado en los intereses electorales que en la reducción de la violencia. Según Aguilar:

“[...] esta estrategia también buscaba crear un clima de alarma social en la población, de manera que el temor al crimen y a la inseguridad favoreciera el apoyo público a todo tipo de medidas autoritarias, y por lo tanto al partido oficial que lideraba la política de mano dura” (Aguilar, 2019, p. 11).

Investigaciones sobre políticas de seguridad en Centroamérica sugieren que estos planes por sí solos no sólo no logran reducir la delincuencia, sino que pueden, a largo plazo, aumentarla (Muggah, et. al. Al, 2018; Guitérrez Rivera, 2010). La académica Sonja Wolf, autora de un libro sobre la mano dura en El Salvador, sostuvo que entre las consecuencias más perjudiciales de esas estrategias estaban las capturas masivas de presuntos miembros de pandillas, que contribuían a la superpoblación de las cárceles y a la sobrecarga de las instituciones de justicia. En su libro, Wolf explicó que los encarcelamientos masivos de sospechosos a principios de la década de 2000 condujeron a una cohesión entre las pandillas más grandes, ayudándolas a establecer una estructura sólida y jerárquica dentro de las cárceles (Wolf, 2017). A largo plazo, este enfoque también puede dañar la percepción pública de las autoridades públicas (Banco Mundial, 2011).



*Un estudiante de Guatemala representa su vida cotidiana en su barrio con un dibujo de dos personas peleando.*

Durante los últimos años, los gobiernos de la región han reconocido la importancia de contar con estrategias más holísticas y basadas en la prevención como parte de sus planes generales de reducción de violencia. Con el apoyo internacional, los funcionarios de los gobiernos de Guatemala y El Salvador han elaborado diagnósticos exhaustivos sobre las raíces sociales y económicas de sus problemas de violencia armada. Sin embargo, aunque los planes y las instituciones están en marcha, la financiación para la prevención de la violencia ha sido mínima en comparación con el gasto público en las fuerzas de seguridad haciendo que estas iniciativas dependan en gran medida del apoyo de donantes (International Crisis Group, 2017). Como resultado, los ciudadanos apenas han visto los efectos positivos de estrategias de seguridad más amigables, lo que reduce los incentivos para que los gobiernos las sigan aplicando o aumenten la financiación.

A pesar del importante vínculo entre las armas de fuego y las tasas de homicidio de la región, las instituciones públicas del Triángulo Norte han mantenido las iniciativas de control de armas como una cuestión separada de sus planes de seguridad más amplios. En Guatemala, las armas están reguladas por la “Ley de Armas y Municiones”, aprobada en 2009 y considerada una de las leyes de regulación de armas más completas de la región. La “Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares” de El Salvador es la más antigua del Triángulo Norte (1999), aunque ha sido actualizada periódicamente para cubrir algunos de sus vacíos legales. La legislación sobre armas más reciente de la región fue aprobada en Honduras en mayo de 2019 y sigue las normas internacionales sobre el control de armas (FESPAD, 2019).<sup>7</sup>

---

7 Para obtener más información sobre la legislación en materia de armas de cada país y sus limitaciones, consulte el informe de 2019 de FESPAD titulado “Impacto de las armas pequeñas y ligeras en la seguridad pública, la cultura de paz y el desarrollo sostenible en la región del norte de Centroamérica”, en particular el capítulo 5.

# 2.

## Testimonios de Expertos sobre Violencia a Nivel Comunitario

El equipo de investigación realizó más de 50 entrevistas semiestructuradas con expertos en Guatemala, Honduras y El Salvador para poner en perspectiva los resultados de las actividades comunitarias. El perfil de los entrevistados incluye académicos, expertos en seguridad, trabajadores sociales, médicos, líderes comunitarios, oficiales de policía y diplomáticos que analizaron cómo las armas pequeñas afectan la vida cotidiana de las personas que viven en zonas de alta criminalidad. Debido a la sensibilidad del tema, la mayoría de los entrevistados decidieron permanecer en el anonimato. Dentro de posible, los testimonios de los expertos aparecen respaldados por datos confiables.

### 2.1 La Presencia de Armas en las Comunidades

Según los expertos de los tres países, la mayoría de las armas que circulan por el Triángulo Norte son ilegales, especialmente en las zonas que registran altos índices de delincuencia. Los informes de la UNODC y de Small Arms Survey señalan que el número de armas de fuego ilegales en los tres países oscila entre 2,6 y 3 millones, en comparación con 1,8 millones de armas legales (UNODC, 2012; Karp, 2017). Los entrevistados que viven y trabajan en comunidades afectadas por la violencia armada identificaron tres factores principales que explican la amplia disponibilidad de armas de fuego ilegales en esas zonas:

- Las percepciones de inseguridad de las personas;
- Los débiles mecanismos de control de las armas; y,
- Deficiencias en los procesos de desarme tras las guerras de la región.

El director de una ONG comunitaria de Guatemala con proyectos en zonas controladas por pandillas explicó que la gente suele acudir al mercado negro para comprar armas porque allí son más baratas. En julio de 2019, este entrevistado dijo que el precio de un arma en el mercado negro guatemalteco era de alrededor de 130 dólares, mientras que en las tiendas era de 650 a 1.000 dólares. Una sola bala puede costar tan sólo 0,13 dólares. Un funcionario guatemalteco entrevistado respaldó esta declaración:

“Las balas son tan económicas que los criminales las usan indiscriminadamente cuando matan a alguien”.

La percepción pública de las armas de fuego y las razones para adquirirlas

varían de un país a otro. En Honduras, una encuesta nacional realizada por la Universidad Autónoma de Honduras mostró que el 54% de los encuestados consideraba que un arma era necesaria para la protección (IUDPAS-UNAH, 2019, p. 11). Sorprendentemente, la tendencia a poseer armas en Honduras es mayor en las zonas rurales que en las ciudades, donde las tasas de delincuencia son más altas. Este fenómeno se mencionó en una entrevista con un experto en seguridad hondureño que lo relacionó con una “cultura de las armas”. En Guatemala, las armas están registradas como un derecho constitucional. Sin embargo, según una encuesta citada en un informe regional del grupo de la sociedad civil salvadoreña FESPAD sobre las armas de fuego en el Triángulo Norte, el 80% de la población rechaza su uso (FESPAD, 2019, p. 65). Una encuesta realizada en 2015, financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre las armas de fuego en El Salvador reveló que el 55% de la población no tenía un arma y rechazaba la idea de comprar una (PNUD, 2015, p. 128).

Según los entrevistados, tener armas de fuego disponibles en la comunidad tiene un gran costo social. Un sacerdote salvadoreño observó que las armas de fuego se habían convertido en el mecanismo ordinario para resolver disputas interpersonales, simplemente porque están a la mano: “[...] casi todos los problemas se resuelven con armas”.

Según una trabajadora social de El Salvador, “las armas [...] han sustituido a las palabras”. Según su criterio, las armas de fuego conforman una de las muchas formas de violencia de la sociedad de este país. El director de una ONG de Guatemala consideraba que la presencia de armas era un síntoma visible de la desconfianza social a nivel local:

“[...] usted no necesita ver las armas para sentirse inseguro, es el sentimiento de sentirse observado, el “gran hermano” que hay en las comunidades lo que hace que todo el mundo esté tan asustado... Las armas son un complemento al ejercicio de la autoridad de estos grupos criminales, es accesorio.”

## 2.2 Las Armas y la Violencia de Pandillas

Entre los numerosos retos que afronta el Triángulo Norte en materia de delincuencia, varias fuentes coincidieron en que las pandillas son, de lejos, el actor más importante en la violencia a nivel comunitario, en particular en las zonas urbanas.<sup>8</sup> Las pandillas más grandes de la región son la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara Barrio 18, ambas formadas originalmente en

---

<sup>8</sup> *El norte de Centroamérica es un punto de tránsito clave para el tráfico de drogas, personas y armas, que se ha convertido en un negocio muy rentable para los cárteles de la droga. Aunque no están directamente involucrados en la violencia comunitaria, los narcotraficantes son una de las principales razones de las altas tasas de impunidad y corrupción de la región, y se consideran un factor estructural que alimenta la delincuencia (ONUDD, 2012; CICIG, 2019). Dado que las pandillas desempeñan un papel mucho más importante en las comunidades, este informe se centrará específicamente en la violencia armada cometida por las pandillas a nivel local.*

los suburbios de Los Ángeles por migrantes centroamericanos (International Crisis Group, 2017). Hoy en día, las pandillas representan una grave amenaza para la seguridad de la región. En un artículo del New York Times de 2016, un grupo de periodistas informó que las pandillas eran responsables de cerca del 50% de todos los homicidios en El Salvador, y que desafiaban a las autoridades estatales en todo el país. (Martínez et al., op. cit.).

Los entrevistados que trabajan en comunidades vulnerables de El Salvador y Guatemala explicaron que las pandillas utilizan las armas para ejercer su poder. El director de un centro infantil en San Salvador mencionó que los miembros de las pandillas solían estar fuertemente armados y que se había acostumbrado a ver “jóvenes de entre 12 y 20 años armados”, que actuaban como guardianes del barrio. Un trabajador de una ONG guatemalteca afirmó haber observado a pandilleros de alto rango portando su arma en todo momento. “Es como parte del kit de ser pandillero”, afirmó. Según su experiencia, los miembros más jóvenes sólo llevan un arma cuando están en una misión, como ir a recolectar dinero de una extorsión.

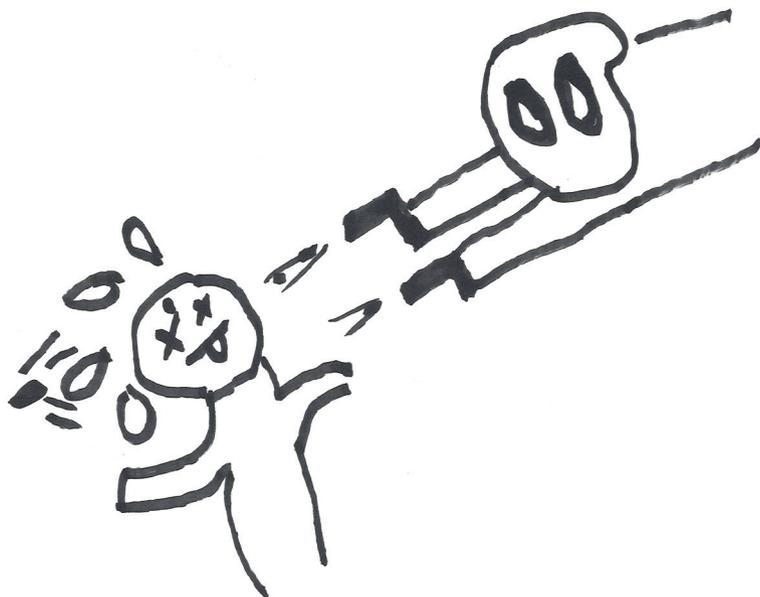
Según un trabajador de una ONG que gestiona proyectos de prevención de la violencia en Guatemala, el motivo principal por el que las pandillas tienen armas de fuego en un vecindario es para controlar y persuadir.

“Las armas se utilizan en un primer momento [antes de un asesinato] para intimidar a la persona y llevarla del punto a al punto b. Las armas se presentan en situaciones en las que no hay mucho control del territorio, cuando van a atacar a los rivales o cuando son sorprendidos por la policía y realmente no tienen nada más con lo que reaccionar”, explicó.

Según el periodista Roberto Valencia, radicado en El Salvador, la fallida tregua de las pandillas (2011-2012) proporcionó información relevante sobre su capacidad armada en el país. Durante una entrega pública que formaba parte de las medidas de fomento de la confianza, las pandillas entregaron escopetas, carabinas, revólveres y pistolas como fusiles de asalto M-16, AK-47 y FAL; subfusiles M3-A1 y Steyr MP-34; ametralladoras Ingram M-10 e Intratec AB-10; granadas; abundante munición; y un lanzacohetes LAW (Valencia, 2016).

### **2.3 Grupos Vulnerables: Violencia Letal contra los Jóvenes y las Mujeres**

La mayoría de las víctimas letales de la violencia armada en el Triángulo Norte son jóvenes. En Honduras, el 68,3% de las víctimas de homicidio en 2018 tenían entre 15 y 34 años de edad (IUDPAS-UNAH, 2019, p. 2). En Guatemala y El Salvador, el 42% de los muertos en incidentes violentos entre 2013 y 2018 tenían entre 18 y 29 años (Infosegura, última consulta el



*Un dibujo de un joven participante de Guatemala que representa lo que es vivir en su comunidad.*

20/12/2019). Un estudio de la Universidad Internacional de Florida publicado en 2017 señaló que en El Salvador el grupo de edad más vulnerable a los asesinatos violentos (15 a 29 años) se correlaciona con la edad media estimada de los miembros de las pandillas, lo cual indica un fuerte vínculo entre los asesinatos de jóvenes y la violencia de pandillas (Cruz et. Al., 2017).

Un entrevistado de una ONG salvadoreña destacó que el grupo de edad entre 14 a 17 años es el más vulnerable a la violencia de las pandillas. Un trabajador social de Honduras señaló que las pandillas reclutan muchachos de alrededor de la misma edad en las zonas donde están activas. Muchos jóvenes se involucran porque simpatizan con los líderes o porque ven a las pandillas como una fuente de dinero fácil. En el primer caso, explicó, los líderes no necesariamente obligan a la persona a convertirse en miembro de una pandilla, sino que le piden apoyo para tareas específicas. Otro trabajador social entrevistado en Honduras que es mentor de familias en barrios controlados por estos grupos denunció que las pandillas se aprovechan de las necesidades de los niños:

“[...] les ofrecen estatus, afecto, dinero, reconocimiento y muchas cosas que no tienen en sus hogares”.

Una médica guatemalteca que ha tratado a los hijos de los miembros de las pandillas lamentó que los niños que nacen en familias criminales estén atrapados en un ciclo generacional de violencia. Ella había sido testigo de

cómo esos niños, después de sufrir pérdidas de familiares durante su infancia, se habían unido más tarde a las pandillas para buscar venganza. Otro profesional de la medicina entrevistado en Honduras también habló de esta familiaridad con la violencia armada entre los niños:

“Me quedé sorprendido cuando escuché a una niña pequeña decir que el trabajo de su padre era matar, y lo dijo de así sin más, porque para ella eso era completamente normal”.

Aunque a nivel regional los hombres son más vulnerables a la violencia armada que las mujeres, las investigaciones muestran que estas últimas son víctimas de otros tipos de abuso que a menudo preceden a una violencia homicida. Según la base de datos Infosegura, por cada femicidio entre 2013 y 2018, ocho hombres fueron asesinados (Infosegura, última consulta el 20/12/2019). Sin embargo, en un informe de la Fundación Heinrich Böll en el que se citan cifras de la Secretaría de la Declaración de Ginebra se destacaba que los países del Triángulo Norte registraron las tasas de feminicidio más altas del mundo (por cada 100.000 habitantes) entre 2007 y 2012:

- 14,4 en El Salvador;
- 10,9 en Honduras; y,
- 9,3 en Guatemala (Montti, et. al., 2019, p. 15).

En una encuesta realizada en 2017 por el Ministerio de Economía de El Salvador se determinó que el 67% de las mujeres entrevistadas habían sufrido violencia sexual, física o psicológica en su vida (Ministerio de Economía de El Salvador, 2018, p. 25).

Los expertos entrevistados mencionaron que las mujeres suelen ser víctimas de violencia no letal. Una médica guatemalteca recalcó que, incluso siendo los hombres los que son asesinados con mayor frecuencia en las comunidades, en su experiencia las mujeres suelen necesitar atención médica más urgente después de las disputas armadas. La entrevistada relató que la mayoría de las pacientes que había tratado por heridas de bala tenían entre 13 y 36 años y que muchas estaban supuestamente vinculadas a organizaciones criminales.

“Las mujeres terminan siendo víctimas colaterales de la violencia”, dijo un experto en seguridad de Guatemala que también había observado esta tendencia.

La violencia contra la mujer en Guatemala está, según una fiscal consultada, profundamente vinculada a la dinámica abusiva de las relaciones sentimentales basadas en el poder y la dominación de sus parejas. Estos están, en su

opinión, “implícitos en el sistema [social guatemalteco] en el que vivimos”. Un trabajador de una ONG en este país consideró que este problema era muy común a nivel comunitario en Honduras, donde las niñas que se unen a una pandilla o salen con uno de sus miembros están especialmente expuestas a la violencia y el abuso con armas. Citando un caso particular que había presenciado en una comunidad en la que trabaja, esta entrevistada señaló que mientras las novias de los pandilleros estaban indefensas, se volvían intocables cuando se casaban:

“[...] las novias de los miembros de las pandillas corren el riesgo de ser maltratadas y asesinadas, pero cuando se convierten en esposas son respetadas de por vida”.

## 2.4 Aislamiento, Trauma y Miedo

Las fronteras invisibles, los límites entre zonas de pandillas rivales que los ciudadanos no pueden cruzar, son un fenómeno común en la región, especialmente en El Salvador. Según un informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC):

“[...] a medida que el control del territorio en el vecindario cambia entre las pandillas, se dibujan fronteras, invisibles para personas externas, pero fuertemente impuestas a los residentes” (NRC, 2016, p. 3).

Una ex pandillera de Honduras entrevistada para este informe explicó que cuando estaba activa, su papel como “bandera” era vigilar los límites territoriales de la pandilla y asegurarse de que no entraran extraños. Un sacerdote salvadoreño admitió que este nivel de territorialidad de las pandillas no le había dejado otra opción que celebrar diferentes misas en las zonas vecinas para que todo el mundo pudiera asistir. Este entrevistado explicó que cualquier persona que se encontrara en un vecindario dirigido por una pandilla diferente a la que dirige su propio vecindario sería advertida para que se fuera, si no sería asesinada inmediatamente.

Un trabajador de una ONG salvadoreña denunció que la represión y la severa acción policial por parte de las autoridades estatales habían exacerbado el fenómeno de las fronteras invisibles al hacer que los grupos delictivos estuvieran más atentos a los movimientos en sus zonas de operación:

“[...] el estado [salvadoreño] ha convertido las comunidades en guetos. Hay niños que no han salido de su casa en un año. Por eso cuando van a la cárcel no ven la diferencia”, comentó.

En toda la región, los entrevistados han sido testigos de un aumento de problemas de salud mental severos en las poblaciones jóvenes que viven en zonas de alta criminalidad. Una médica guatemalteca lamentó ver más

intentos de suicidio por parte de jóvenes en las comunidades en las que trabajaba, y señaló que algunos de esos casos estaban relacionados con violencia de las pandillas. Un trabajador de una ONG que dirige proyectos humanitarios en zonas afectadas por las pandillas en Honduras describió cómo la violencia armada, principalmente por parte de estos grupos criminales, fomenta trastornos psicológicos y muy baja autoestima entre los jóvenes. En su experiencia, tanto víctimas como perpetradores sufren:

“[...] está el mito de que las pandillas violan y matan, pero si uno mira más allá verá un grupo de jóvenes frustrados y deprimidos que se sienten completamente desesperanzados”.

Para aquellos que viven y trabajan en áreas controladas por pandillas, el miedo marca las relaciones diarias entre los miembros de la comunidad. Dos fuentes de El Salvador, un trabajador de una ONG y un sacerdote, habían notado que las personas que vivían en zonas con fuerte presencia de pandillas se habían vuelto “pasivas” ante los actos violentos ya que no denunciaban los incidentes armados por temor a las represalias de estos grupos. Un agente de policía hondureño explicó que las pandillas en muchos barrios tienen tales niveles de control que las personas están demasiado asustadas para colaborar con las autoridades que investigan los homicidios. Este fenómeno fue capturado por la defensora de derechos humanos Jeanne Ridders en un informe de 2016 sobre la violencia local en El Salvador:

“[...] el miedo está tan presente [en las comunidades] que a veces es difícil obtener información precisa sobre los incidentes y hechos que deben tenerse en cuenta para comprender los procesos de desarrollo de la comunidad, la promoción de los derechos humanos o incluso la consolidación de la paz”.

## **2.5 Relaciones entre la Comunidad y las Fuerzas de Seguridad**

En una entrevista con Juan Estrada, jefe de seguridad ciudadana del municipio guatemalteco de Villa Nueva (cerca de la capital, Ciudad de Guatemala), habló de las dificultades a las que se enfrenta la policía al acercarse a los miembros de la comunidad en las zonas controladas por las pandillas. Según Estrada, la población tiende a percibir las pandillas como un “mal necesario”, basándose en la lógica de que cuando estos grupos controlan una comunidad específica, los nuevos delincuentes no entran. Cuando los incidentes violentos disminuyen a medida que una pandilla establece el control de un vecindario, la población local asocia la menor criminalidad con la capacidad de la pandilla para controlar la violencia. En la opinión de Estrada, esta es una estrategia común que las pandillas utilizan para aumentar su apoyo social:

“La violencia criminal se ha normalizado hasta el punto en que la gente piensa que las pandillas protegen a la comunidad sólo porque operan dentro de ese territorio, pero las pandillas son las que extorsionan a los negocios que son, en su mayoría, propiedad de miembros de la comunidad”, afirmó.

Los agentes de policía entrevistados en Guatemala, Honduras y El Salvador expresaron su preocupación por el hecho de que la creciente presencia del ejército en las tareas de seguridad pública, un componente clave de la “mano dura”, estaba creando confusión en la opinión pública acerca de las diferentes funciones que desempeñan la policía y el ejército. Un policía hondureño consideró que las acciones represivas de la policía militar durante las manifestaciones en este país en el 2019 habían creado una percepción negativa de la institución en su conjunto. Un diplomático radicado en Tegucigalpa también criticó los numerosos cuerpos híbridos de policía y militares creados por el gobierno hondureño que, en su opinión, estaban confundiendo a los ciudadanos sobre el papel de cada institución y limitando el impacto de los proyectos de policía comunitaria.

Cuando se le preguntó sobre la relación entre las comunidades y la policía, un trabajador de una ONG en Honduras dijo que la mayoría de los ciudadanos “no saben cómo relacionarse con la policía, les tienen miedo”.

Un trabajador social, también de Honduras, creía que la “mano dura” contribuía a crear una imagen negativa del Estado en general, no sólo de la policía. Sostuvo que, en su experiencia, las instituciones públicas estaban completamente ausentes en la mayoría de las zonas controladas por pandillas, y que los agentes de policía se encontraban entre las pocas interacciones, generalmente negativas, que los ciudadanos tienen con el Estado. El director de una ONG de derechos humanos de El Salvador planteó una preocupación similar:

“[La policía] no distingue entre los miembros de las



*Una representación de la vida cotidiana en una comunidad por un adolescente participante de Honduras.*

pandillas y los que no lo son, así que al final la comunidad se ve doblemente afectada por la violencia”.

## 2.6 Consecuencias Humanitarias de la Violencia Armada

A finales de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había registrado 349.900 refugiados y solicitantes de asilo en todo el mundo procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador (ACNUR, 2019, p. 1). Esta institución también registró 350.000 desplazados internos en Honduras y El Salvador para finales de 2019 (ACNUR, 2019, p. 7).

El director de una ONG entrevistado en El Salvador expresó su preocupación por el fenómeno del desplazamiento interno en este país que, según su experiencia, es un problema con múltiples causas que va más allá de la violencia de las pandillas:

“Tenemos familias de agentes de policía desplazadas por miembros de pandillas, familias de miembros de pandillas desplazadas por la policía, y familias de miembros de pandillas que, por tener un problema con su pandilla o con la policía, también tienen que irse”, explicó.

Los que huyen pueden estar expuestos a más violencia en sus viajes hacia el norte que en sus ciudades de origen. Una ex pandillera de Honduras entrevistada para este informe compartió un testimonio sobre los peligros inesperados que encontró en su viaje:

“Huí de Honduras porque necesitaba escapar de esta situación, pero lo que encontré cuando me fui fue mucho peor que la violencia de las pandillas en Honduras.”

Para cruzar México, ella tomó el infame tren llamado “La Bestia”, que cruza México hasta la frontera con Estados Unidos. Una noche, miembros locales del MS-13 la emboscaron en el tren y presencié una masacre:

“Vi cómo uno de mis amigas que viajaba conmigo fue decapitada frente a mí. Sólo estoy aquí hoy contándoles esta historia porque, por alguna razón, el tipo que nos estaba atacando sabía que yo era parte de la MS-13 en Honduras”.

# 3.

## Atrapados en el Fuego Cruzado



Un dibujo de una adolescente de Honduras titulado "Mi perspectiva de la vida cotidiana en la comunidad".

### Trabajo de Campo

La metodología de investigación de este informe se basó en 22 entrevistas grupales con miembros de comunidades que viven en zonas con niveles elevados de violencia armada en Guatemala, Honduras y El Salvador. Un total de 140 participantes, la mayoría de ellos jóvenes, mujeres y niños, participaron voluntariamente y de forma anónima en estas actividades. Los principales objetivos de las actividades fueron comprender cómo se ven afectadas las víctimas por las armas pequeñas, así como buscar soluciones para reducir y prevenir la violencia armada.

### 3.1 Metodología

Los criterios de selección de las comunidades<sup>9</sup> en cada país se basaron en la facilidad de acceso por parte del equipo de investigación; cuán represen-

9 Los nombres de las comunidades específicas seleccionadas en cada país no se mencionan por razones de seguridad.

tativas son sus tasas de homicidio y sus dinámicas de violencia en relación con el resto del país; y su relevancia para la comparación a nivel regional. Dado que la violencia armada y más específicamente las pandillas son en su mayoría un fenómeno urbano concentrado en las ciudades más grandes del Triángulo Norte, el equipo de investigación seleccionó zonas cercanas a las capitales de cada país.

En Guatemala, la comunidad seleccionada fue la de un pequeño vecindario de Villa Nueva, cerca de la Ciudad de Guatemala. El equipo dirigió un total de ocho actividades con dos grupos, uno formado por mujeres y otro por estudiantes de secundaria. Este municipio tiene una alta presencia de grupos criminales como la MS-13 y la Pandilla Barrio 18 y a mediados de 2018 registró una tasa de homicidios de 48,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según las cifras de la policía mencionadas en un informe del grupo de investigación Diálogos (Diálogos, 2018, p. 11).

En Honduras, el equipo de investigación llevó a cabo seis debates con jóvenes miembros de la comunidad en un vecindario de Comayagüegla, cerca de Tegucigalpa, en un área controlada por la MS-13. El equipo pudo realizar dos entrevistas grupales más con niños de otra comunidad de alto riesgo en la capital Tegucigalpa. Según el observatorio de la violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, la tasa de homicidios de 2018 en el departamento más grande de Francisco Morazán, donde se encuentran estas dos comunidades, fue de 39,9 (IUDPAS-UNAH, 2019a, p. 4).

Los participantes en El Salvador procedían de tres vecindarios diferentes de Quezaltepeque, Soyapango y Apopa, ubicados en el norte y el oeste de El Salvador respectivamente, que también son zonas controladas por pandillas. Según Infosegura, el número de muertes violentas en estos municipios durante 2018 fueron los siguientes: 38 de Quezaltepeque; 96 en Soyapango; y 92 en Apopa (Infosegura, último acceso 26-01-2020).

Varias organizaciones locales ofrecieron apoyo para facilitar la investigación y establecer conexiones en las comunidades seleccionadas. El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) en Guatemala y el Consejo Comunitario de Desarrollo de Villa Nueva (COCODE) apoyaron al equipo de investigación en la organización de entrevistas con las autoridades locales y asesoraron sobre cómo enmarcar los debates. La ONG Buenas Acciones Honduras facilitó el acceso de los investigadores a las zonas de alto riesgo de Tegucigalpa y apoyó activamente una actividad con niños en Comayagüegla. En El Salvador, la ONG de derechos humanos Tutela Legal organizó reuniones entre el equipo de investigación y grupos de jóvenes y familias que viven en zonas controladas por pandillas en Apopa, Quezaltepeque y Soyapango. En los tres países, el equipo solicitó el consentimiento de las personas e instituciones pertinentes antes de entrevistar a menores de edad.

En la siguiente sección se resumen las principales conclusiones de la investigación comunitaria, realizada entre julio y agosto de 2019, por país. Los testimonios reflejan la vulnerabilidad de los participantes en contextos de violencia crónica, así como los retos de implementar las políticas de reducción y prevención de la violencia armada al nivel comunitario. El equipo de investigación observó que, aunque el tema de las armas nunca fue propuesto directamente en las actividades debido a su sensibilidad, los participantes lo mencionaron en varias ocasiones, lo que demuestra una gran familiaridad con las armas de fuego entre los civiles, especialmente niños y jóvenes.

Las conversaciones se centraron en las experiencias personales de los participantes que viven en comunidades vulnerables y en sus estrategias preferidas para reducir la violencia.<sup>10</sup> Los entrevistados describieron las realidades de sus propios vecindarios, realidades que pueden o no corresponder a las de otras comunidades. Debido a la amplia gama de perfiles y ubicaciones de los participantes, sus testimonios no deberían considerarse como dinámicas generalizadas de la vida comunitaria en zonas con altas tasas de delincuencia en la región, sino más bien como un compendio de experiencias personales que pueden ayudar a explicar algunos de los principales retos a los que se enfrentan los ciudadanos en esas zonas.

## **3.2 Viviendo en Comunidades Afectadas por la Violencia**

### **3.2.1 Guatemala**

En Guatemala, hubo dos grupos de discusión de la misma comunidad en Villa Nueva. El primer grupo estaba formado por mujeres de entre 30 y 50 años que desempeñan un papel activo en su vecindario. El segundo grupo consistía en alrededor de una docena de estudiantes de secundaria, tanto chicos como chicas. El equipo de investigación llevó a cabo ocho actividades en total, cuatro con cada grupo.<sup>11</sup>

El grupo de estudiantes de secundaria de Villa Nueva habló abiertamente sobre la presencia de armas en su vecindario, aunque nunca se les preguntó directamente sobre ello. En una actividad en la que los participantes de este grupo tuvieron que elegir entre diferentes armas para defenderse en un hipotético escenario peligroso, 10 de 13 dijeron que evitarían el uso de armas de fuego porque las consideraban peligrosas. No obstante, todos los participantes de este grupo reconocieron haber sostenido en sus manos un arma. Según la mayoría de los participantes, el uso de armas pequeñas es un mecanismo de autodefensa recurrente en la comunidad, y las pandillas las

---

*10 Consulte las tablas 1-3 del Anexo 1 para un desglose detallado de cada sesión de debate, incluyendo fechas, lugar, perfiles de los participantes y temas de debate en cada país.*

*11 Consulte la Tabla 1 en el Anexo 1 para más información sobre la metodología de la investigación en Guatemala.*

utilizan para ejercer el control territorial. Las armas de fuego también fueron percibidas por algunos participantes como una expresión de masculinidad, y algunos argumentaron que las mujeres no deberían usarlas.

“En las reuniones reales [de pandillas] no hay mujeres, porque son muy sentimentales, y no tienen la fuerza para usar un arma”, dijo un estudiante.

Las mujeres entrevistadas en Villa Nueva también reconocieron la familiaridad con las armas en el vecindario, especialmente entre los jóvenes:

“Al final de la calle hablé con algunos patojos [niños], y me dijeron que una bala cuesta 0.50 GTQ [0.07 USD], o sea que nuestra vida vale muy poco”, dijo una mujer, lamentándose de que los niños conocieran esta información.

Un participante del grupo de la escuela secundaria ejemplificó este nivel de conocimiento sobre las armas después de que se le pidiera que dibujara algo representativo de su comunidad. Explicó su obra de la siguiente manera:

“Quería dibujar a un pandillero buscado por la policía porque ha matado a alguien y, como puede ver, el arma tiene un silenciador.”

Las participantes del grupo de mujeres estaban divididas sobre el uso de las armas. Algunas estaban a favor de usarlas en defensa propia:

“La pistola no solo es para pandilleros, aquí la gente también la tiene para protegerse [...] en este barrio, quien tiene la pistola también tiene el poder”, afirmó una mujer.

Otros rechazaron su uso, argumentando que las armas de fuego producían víctimas colaterales de la violencia, utilizando el ejemplo de las balas perdidas:

“No más armas, por favor. Ya hay demasiadas en manos de mareros y si ellos robaran la mía, sería una más por ahí que podría causar más daño”.

Tanto el grupo de mujeres como los estudiantes de secundaria identificaron a las pandillas como uno de los principales factores de la violencia armada en su comunidad, en particular debido a la extorsión.

“Hay rivalidad [entre las pandillas] para dominar el territorio [...] porque todo el mundo quiere cobrar el dinero de la extorsión”, explicó una mujer mientras discutía el vínculo entre la criminalidad y las guerras territoriales entre pandillas.

Los participantes observaron que la extorsión se había convertido en una experiencia normal tanto para los propietarios de negocios como para los hogares particulares que se ven obligados a pagar un impuesto para “protegerse” de grupos rivales. Algunos miembros del grupo de estudiantes de

secundaria aseguraron que no pagar la extorsión podría llegar a costar la vida.

Algunas de las mujeres consideraron que la presencia de pandilleros en el vecindario no siempre era algo malo. El problema, según algunos participantes, provenía de personas ajenas a la comunidad.

“A nosotras casi no nos afecta la violencia, porque los delincuentes nos conocen, pero si alguien más viene y no la conocen sí, por eso hay que tener cuidado”, advirtió una mujer que apoyaba la idea de que las pandillas no atacarían a sus propios vecinos.

Algunos participantes sugirieron que las pandillas no sólo no hacen daño a sus comunidades, sino que también las protegen de otros grupos delictivos.

“Una vez me robaron el celular, pero este ladrón se confundió y no me reconoció. Debí enterarse por ellos [la pandilla] que yo era miembro de la COCODE [consejo ciudadano local], y por la noche me devolvieron mi celular y se disculparon por ello”, contó una participante al argumentar que las pandillas también pueden ser respetuosas con la comunidad.

A los participantes de ambos grupos en Guatemala les disgustaba la reputación de violencia de la comunidad y el estigma al que se enfrentaban por vivir allí. Algunas de las mujeres reconocieron que era más difícil para sus familiares, en particular para los hombres jóvenes, encontrar un trabajo formal al vivir en esa zona porque los empleadores no los contrataban creyendo que son delincuentes.

“La gente dice que eres un criminal sólo porque vives en una zona roja, pero hay otros lugares más peligrosos que este. Nos sentimos discriminados”, dijo uno de los estudiantes de secundaria.

Aunque todos los participantes en Guatemala eran conscientes de la violencia en su barrio, muchos identificaron las zonas aledañas a su comunidad como más peligrosas. Los participantes insistieron en el hecho de que su zona era más tranquila en comparación a otras del municipio, incluso durante una actividad en la que el equipo de investigación proyectó un mapa de los focos de violencia en Villa Nueva en el que se mostraba que su comunidad estaba tan afectada como otras.

“Es seguro aquí, pero allá abajo [señalando un área diferente en el mapa], sólo hay mareros y ladrones”, advirtió uno de los estudiantes de secundaria.

En este grupo de discusión, la mayoría de los participantes confesaron que nunca habían visitado las comunidades vecinas de Villa Nueva porque sería demasiado arriesgado. Las conclusiones del grupo de mujeres durante la

actividad del mapa fueron que había que ser muy cuidadoso al interactuar con personas ajenas a la comunidad con el fin de evitar el peligro.

“Hay que tener cuidado con lo que se dice o con quién se habla, porque alguien siempre está vigilando, sobre todo cuando no se paga la extorsión”, aseveró una de las participantes.

Las mujeres también se mostraron escépticas con respecto a la policía, una institución que muchos participantes consideraron corrupta e ineficiente. Algunos admitieron que nunca llaman a la policía por problemas en la comunidad porque que habían visto a agentes estrechar la mano con delincuentes de la zona. Los participantes del grupo de estudiantes de secundaria pensaban que la policía evitaba patricular zonas específicas de su vecindario y que a veces hacían la vista gorda ante ciertos delitos. En una de las discusiones del grupo de mujeres surgió la cuestión de que la relación entre la policía y los jóvenes de la comunidad suele ser problemática porque a veces estos últimos son identificados erróneamente como delincuentes. Por esa razón, algunas participantes consideraron que todos los jóvenes deben evitar las calles después de cumplir 15 años.

Varias participantes mujeres aseguraron preferir ver a los militares patrullando las calles, en lugar de la policía, argumentando que los niveles de violencia durante la guerra, cuando el ejército desempeñaba un papel central en la seguridad, eran más bajos. Al comparar las dos fuerzas de seguridad, el grupo de estudiantes de secundaria describió a los soldados como “menos corruptos” y más capaces que los agentes de policía a la hora de imponer respeto y miedo entre la población. De los 18 participantes que participaron en uno de los grupos de estudiantes, 16 estaban a favor de darles a los militares un papel más prominente en la seguridad.

Al ser preguntadas por los problemas que enfrentan las mujeres, estas lamentaron que con frecuencia tenían que luchar porque su trabajo en tareas de prevención de violencia sea reconocido en la comunidad:

“Ha sido muy difícil ganarse el respeto [...] Pero ahora la gente reconoce nuestro trabajo”, dijo una mujer mientras describía los desafíos de conseguir tener voz propia en su vecindario.

A pesar de tener menos tiempo libre que los hombres, las participantes resaltaron que siempre encontraban tiempo para contribuir a la comunidad mediante el voluntariado o la asistencia a las reuniones del consejo local. Las mujeres también expresaron su frustración al interactuar con los hombres en general y con autoridades de orden público en particular, pues sentían que no se las toma en serio. Por eso, como algunas explicaron, dependen de otras mujeres o de sus maridos para mantenerse a salvo fuera de la casa.

“Me siento segura cuando estoy acompañada, porque cuando salgo sola siento que algo malo me puede pasar”, confesó una mujer que admitía sentirse ansiosa en su barrio cuando no camina en grupo.

Los participantes tanto de los grupos de mujeres como de los estudiantes de secundaria también debatieron las repercusiones humanitarias de la violencia armada. Una mujer dijo que una vez tuvo que abandonar la comunidad durante dos años a causa de la violencia de las pandillas y no pudo volver hasta que las personas que la habían amenazado estaban muertas. Así es como relató su historia en una de las reuniones:

“Cuando me estaban extorsionando me pidieron una cantidad que no tenía. Era demasiada plata y no podía pagar, pero los mareros me siguieron y siguieron a mi marido y a mis hijos. Una vez nos dispararon. Por eso nos fuimos... y regresamos [a la comunidad] dos años después cuando a esos mareros ya los habían matado”.

Las participantes del grupo de mujeres explicaron que muchas de las casas vacías, abandonadas por personas que habían huido, acababan siendo ocupadas por pandilleros y utilizadas como centros estratégicos para sus operaciones. Uno de los estudiantes de secundaria también compartió la historia de un pariente que fue enviado a una zona rural dentro de Guatemala por la presión de las pandillas.

### 3.2.2 Honduras

En Honduras, el equipo de investigación organizó ocho actividades. Dos de ellas tuvieron lugar en un vecindario de alto riesgo en Tegucigalpa, y el resto en dos comunidades fronterizas en Comayagüela. La mayoría de los participantes eran niños y jóvenes y, cuando era posible, se separaron por género. Debido a edad de los participantes, las actividades en Honduras



*Una calle en Honduras.*

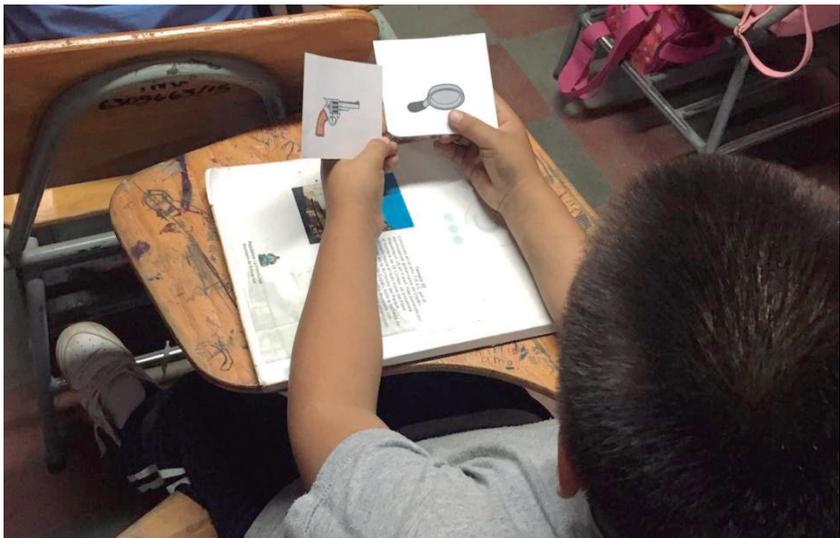
fueron más interactivas para fomentar la discusión en torno a los temas de la investigación.<sup>12</sup>

Los niños entrevistados en Honduras recordaron cómo sus padres y familiares portaban armas para protegerse. Los participantes más jóvenes mostraron un amplio conocimiento de las armas y sus calibres.

“Una vez, encontré un casquillo de 9 mm junto a la escena de un crimen”, dijo un niño de 11 años en Comayagüela al describir en detalle los tipos de armas y municiones que había visto en su barrio. Un participante de Tegucigalpa insistió en que sabía cómo identificar un arma falsa mirando un detalle específico en la mira.

En tres de los grupos de discusión se les pidió a los participantes que eligieran una tarjeta entre muchas con imágenes de diferentes armas – un cuchillo, un objeto punzante, gas pimienta, una sartén y una pistola – con las que defenderse en una hipotética situación de peligro. En cada actividad, casi todos los participantes, independientemente de su género, optaron por la tarjeta de armas de fuego. Todas las jóvenes del grupo de Comayagüela argumentaron que habían elegido el arma en lugar del cuchillo por su eficacia para atacar a un oponente a distancia.

“La pistola nunca falla”, sentenció una de las chicas.



*Durante un taller en Honduras los participantes eligieron cómo se defenderían en escenarios peligrosos hipotéticos de Honduras. Casi todos los participantes optaron por la tarjeta de armas de fuego.*

12 Consulte la Tabla 2 en el Anexo 1 para más información sobre la metodología de investigación en Honduras, así como una breve descripción de las actividades.

En una actividad similar con estudiantes de colegio de Tegucigalpa, todos los participantes eligieron de nuevo la tarjeta con el arma, también basándose en la lógica de su infalibilidad. A pesar de haber elegido la tarjeta de la pistola, algunos sí reconocieron los riesgos y posibles consecuencias jurídicas de utilizarla.

En dos actividades con estudiantes de colegio en Comayagüela y Tegucigalpa, el equipo de investigación repartió disfraces de superhéroes entre los participantes, y estimuló una conversación sobre qué superpoderes les gustaría tener. Los niños mencionaron habilidades relacionadas con la fuerza física, la resistencia y el uso de armas de fuego como sus capacidades preferidas para derrotar el mal.

“Me gustaría tener un traje a prueba de balas”, contó un niño de 10 años en Tegucigalpa. “Que cuando me disparen no me pase nada”, añadió otro participante tras hacer una referencia similar.

Algunos participantes se refirieron a las armas de fuego como una fuente de poder y de éxito en la comunidad.

“Cuanto más grande el arma, mayores las posibilidades de ganar la guerra”, declaró uno de los jóvenes al comentar que se sentiría más seguro y respetado por los demás en su vecindario si tuviera un arma. Para algunos jóvenes del grupo de Comayagüela, las armas de fuego también se asociaban con un mayor sentido de masculinidad y de deseo sexual.

“A las mujeres les gusta vernos armados [...] se van a la cama contigo [si tienes un arma]”, afirmó uno de los adolescentes.

Algunos de los participantes de Comayagüela expresaron su simpatía por las pandillas dado que, en su opinión, traen estabilidad a la comunidad:

“Aquí [los pandilleros] no roban, lo único que hacen es vender drogas, pero no roban”, resaltó un participante.

Una de las jóvenes consideró que es bueno tener contactos en la pandilla local: “Aquí los pandilleros ya nos conocen, así que no nos pasa nada”. Otras participantes estaban de acuerdo.

Del mismo modo, los jóvenes afirmaron sentirse seguros en su barrio porque las pandillas “cuidan de la comunidad”. Algunos dijeron que sus miembros “no son tan malos”.

A pesar de las altas tasas de homicidio registradas en las comunidades seleccionadas de Comayagüela, los jóvenes participantes que vivían allí veían la violencia extrema como parte de su vida cotidiana y consideraban que los tiroteos eran “normales”. Todos los niños entrevistados en Comayagüela

habían sido testigos de un homicidio cerca de sus casas. Tal y como recordó uno de ellos:

“[...] una vez ellos [pandilleros] entraron en la casa de al lado y mataron a una mujer. La dispararon tres veces”.

Una chica del mismo grupo dijo que unos criminales le habían disparado a su padre en la calle recientemente. Las jóvenes de Comayagüela percibían su comunidad como un lugar hostil para las mujeres, afirmando ser víctimas frecuentes de acoso y abuso. Para estar a salvo, las participantes dijeron que optaban por quedarse en casa después de que anocheciera y, en general, evitaban las calles:

“El lugar donde me siento más segura es en mi casa”, dijo una de las chicas.

Las mujeres participantes fueron especialmente críticas con los agentes de las autoridades policiales: “A veces es mejor cuando la policía no está aquí”, dijo una participante de Comayagüela.

Ella había visto a agentes en su vecindario señalando a adolescentes y acusándolos de ser simpatizantes de pandillas sin ninguna prueba. Otra participante del mismo grupo contó que una vez había sido agredida sexualmente por un agente de policía, por esta razón, no confiaría en la policía. Las jóvenes condenaron la falta de apoyo y comprensión de la violencia de género por parte de otros miembros de la comunidad.

“Nos sentimos acosadas. La gente puede estar mirando, pero no se involucran”, dijo una participante.

Las chicas de Comayagüela dijeron que algunas personas del vecindario les habían dicho que “merecían ser violadas” por su forma de vestir. Cuando se les preguntó a los jóvenes de la misma comunidad sobre estas situaciones, un participante dijo que las chicas “exageraban”, respecto al problema de la violencia de género y que esas situaciones no son, en su opinión, tan comunes como ellas afirman. Uno de los adolescentes consideraba que cuando el victimario es una pareja sentimental, la violencia de género debía tratarse como un asunto privado, no como un problema social:

“Esas cosas pasan cuando no hay confianza [en una pareja]”, afirmó el joven.

### **3.3.3 El Salvador**

En El Salvador, el equipo de investigación realizó seis actividades en Quezaltepeque (San Salvador), Soyapango y Apopa (ambos en el departamento de La Libertad) con 48 personas. La problemática de las armas de fuego no pudo ser discutida tan abiertamente como en Guatemala y Honduras debido

a la situación de la seguridad en las comunidades. Por lo tanto, los resultados de la investigación se relacionaron principalmente con la resiliencia de los participantes en situaciones de violencia armada. No obstante, era evidente que todos los participantes estaban familiarizados con las armas de fuego y las consideraban parte de su vida cotidiana.

“En mi comunidad todo el tiempo hay gente con armas”, aseguraba un joven de Apopa.

El tema de la violencia de pandillas estuvo latente en todas las discusiones en El Salvador, pero fue discutido más abiertamente en el grupo de Soyapango. Los ocho jóvenes que participaron en estas actividades mencionaron a las maras como una de las principales fuentes de violencia armada, y afirmaron que no colaborar con estos grupos podría costarles la vida. Los participantes consideraron que las pandillas habían estado presentes en el vecindario durante tanto tiempo que los miembros de la comunidad estaban acostumbrados a vivir con ellas. En su experiencia, el papel de las pandillas como autoridades de facto en la zona incluye el recaudo de extorsiones o la mediación en disputas vecinales. Con una extensa red de informantes locales, los jóvenes de Soyapango coincidieron en que las pandillas ejercían un estricto control sobre todo lo que sucedía en su comunidad.

“Aunque no estén presentes todo el tiempo, [las pandillas] siempre saben lo que está pasando”, declaró un participante.

El grupo de Soyapango estaba ubicado en una zona fronteriza entre los territorios de las pandillas de la MS-13 y del Barrio 18, lo que ponía a la comunidad en constante peligro. Los participantes describieron cómo su comunidad se



había convertido en una zona de amortiguamiento entre barrios controlados por ambos grupos. Aseguraron que el fuego cruzado es aún peor cuando llega la policía, por lo que consideraron que salir a la calle es inseguro la mayor parte del tiempo. Como resultado, los miembros de la comunidad prefieren caminar en grupo o quedarse en casa para evitar el peligro.

*Un dibujo de un taller de investigación llamado “Mi perspectiva de la vida cotidiana en la comunidad” por un participante adolescente de Honduras.*

“Las familias de esta comunidad viven aterrorizadas por la

violencia”, confesó un joven de Soyapango.

Los miembros de este grupo reconocieron las limitaciones de la libre circulación en su comunidad y explicaron que podrían ser asesinados si cruzaban al territorio de la pandilla rival.

“A veces es llevar una mochila durante un asalto, entregar un celular, recoger un sobre o simplemente mirar mientras el líder [de la pandilla] hace algo horrible... es una de las pocas maneras con las que ganar algo de plata”, explicó un participante al señalar que la falta de empleo se convierte en un incentivo para recurrir a las pandillas.

Las experiencias personales de aislamiento en El Salvador fueron mucho más extremas que en Honduras y Guatemala. Un grupo de diez padres de Quezaltepeque atribuyó este problema a la presencia de pandillas en su comunidad. Para ellos, quedarse en casa era un mal necesario para salvar la vida de los jóvenes.

“No salir de casa porque el peligro está en la calle”, advertía un participante al explicar cómo reducir el riesgo de sufrir violencia en la comunidad.

“Las familias siempre están preocupadas por sus hijos porque no saben si van a volver a casa esa noche”, lamentaba otro padre de Quezaltepeque que consideraba el aislamiento como la mejor manera de mantenerse seguro en la comunidad. Muchas familias tratan de proteger a sus hijos del contacto con las pandillas pagando un transporte privado para que los niños no tengan que volver caminando solos a casa desde la escuela, explicó un participante.

La cuestión de las fronteras invisibles se planteó en el grupo formado por 30 jóvenes de Apopa.

“Para jóvenes como nosotros, no hay oportunidades. Solo podemos estar encerrados en casa para evitar que nos pase algo malo” denunciaba uno de los participantes.

El grupo de Apopa también discutió el hecho de que la mayoría de las personas en su comunidad sufrían estigmatización por vivir en ese barrio, conocido por ser especialmente violento. Muchos consideraban que este estigma era una de las razones por las que los jóvenes habían recurrido a las pandillas como fuente de ingresos. Como señaló un participante, la mala propaganda hacia la comunidad había provocado que la gente tuviera más miedo de sus propios vecinos:

“Desearía que la gente no hablara tan mal de mi comunidad. Es cierto que

hay pandilleros, pero no todos los que vivimos allí somos malos”.

En general, los participantes salvadoreños aseguraron sentirse vulnerables cuando la policía y los militares patrullaban su comunidad, especialmente durante las operaciones contra pandillas. Según miembros del grupo de Quezaltepeque, estas misiones pueden llegar a ser muy violentas ya que suelen tener como objetivo a los jóvenes. Algunos observaron cómo, a la vez que se detiene a jóvenes, a veces los agentes también tratan a las pandillas con permisividad, lo que aumentaba su frustración. El grupo de Soyapango describió sus relaciones con la policía como tensas, y algunos reconocieron que ver a un agente de policía les ponía ansiosos. Muchos dijeron que por lo general evitaban hablar con la policía por temor a las represalias de las pandillas, que podrían tomarlos como informantes.

En los tres grupos de discusión, los participantes reconocieron las consecuencias negativas de la “mano dura”. En los grupos de Apopa y Soyapango, los participantes veían cómo la policía se refería con demasiada frecuencia a los jóvenes como sospechosos de ser miembros de una pandilla. En su experiencia, los agentes los abordaban en base a esa suposición sin importar si hubiera pruebas de su participación en grupos criminales. Muchos participantes observaron que cuando la policía acudía a la comunidad para empezar a amenazar a los jóvenes, la población local se sentía atacada al ver que sus hijos eran maltratados. Los participantes de Quezaltepeque compartían la opinión de que las acciones represivas pusieron a los miembros de la comunidad en contra de los funcionarios de las autoridades policiales.

“Los jóvenes son los más expuestos al riesgo, porque a veces la policía los confunde con ellos [pandilleros] y les pegan”, condenaba uno de los participantes.

Aunque no se discutió en profundidad, el grupo de Soyapango habló de casos de personas de su comunidad que se habían visto obligadas a huir de las duras realidades de su vecindario. Los participantes de este grupo dijeron que tenían parientes que habían viajado a Estados Unidos indocumentados debido a la situación de sus comunidades, apoyándose en la gran comunidad de salvadoreños que viven en ese país. Según su experiencia, la opción de salir de El Salvador es considerada por todos quienes piensan escapar de las muchas formas de violencia armada que sufren a diario.

# 4.

## Soluciones a la Violencia Armada



Una representación de la vida en su comunidad por un participante hondureño.

### 4.1 Recomendaciones de la Investigación Comunitaria

#### 4.1.1 Guatemala

La creación de espacios seguros para los jóvenes de la comunidad fue una de las principales preocupaciones de todos los participantes de Guatemala. Atrapados entre la violencia de las pandillas y el abuso policial, el grupo de estudiantes de secundaria mostró frustración por la constante estigmatización y la falta de personas en las que poder confiar.

“Los adultos nunca te dirán las cosas tal como son. Mienten y se enojan si dices cosas”, afirmó un estudiante de Villa Nueva.

La desconfianza generacional también apareció como un factor de ansiedad en el grupo de mujeres, en el cual todas las participantes eran madres. En este sentido, algunas reconocieron la necesidad de comprender mejor las luchas de sus hijos por vivir en contextos violentos y plantearon la posibilidad de tener un grupo de padres en la escuela secundaria donde pudieran intercambiar ideas sobre cómo ofrecerles un mejor apoyo.

La mayoría de los participantes en Guatemala identificaron la falta de desarrollo y de oportunidades económicas como una causa estructural de la delincuencia en su comunidad. El grupo de estudiantes de la escuela dijo que desearía tener más programas extraescolares, espacios de recreo y centros como bibliotecas donde poder escapar de los problemas cotidianos de la comunidad.

“[Que haya] programas deportivos o educativos, así habría menos delincuencia”, dijo una de las mujeres.

Los participantes se mostraron muy interesados en tener más oportunidades de empleo y formación para los jóvenes a fin de prevenir el reclutamiento de pandillas.

Las mujeres de Villa Nueva reconocieron que luchan por ser económicamente independientes de sus parejas. Esta realidad es especialmente sensible para chicas más jóvenes de la comunidad que habían quedado embarazadas a una temprana edad, lo cual según las participantes había limitado su desarrollo profesional. En su opinión, los programas de educación sexual serían buenos para todos los jóvenes de la comunidad, no sólo para las mujeres. Una fiscal guatemalteca entrevistada para este informe también subrayó la necesidad de promover este tipo de iniciativas que, en su experiencia, son esenciales para apoyar el empoderamiento de la mujer a nivel comunitario.

Para reducir el acoso sexual en los espacios públicos, los participantes expresaron interés en autobuses sólo para mujeres donde poder sentirse más seguras en su camino al trabajo o a la escuela. Con el fin de desarrollar más estrategias para proteger a las mujeres guatemaltecas de las muchas formas de violencia a las que están expuestas, un informe de 2018 del grupo de investigación Diálogos recomendó a las autoridades reunir más datos relacionados con la violencia de género. Este reporte también señalaba que la Fiscalía General de Guatemala y la Policía Nacional Civil deberían contar con funcionarios especializados dedicados exclusivamente a la atención de los casos de violencia de género. Las mujeres indígenas, a las que a menudo se ignora en el análisis de la violencia en Guatemala, deben ser especialmente tenidas en cuenta.

#### **4.1.2 Honduras**

Los jóvenes que viven en comunidades de alto riesgo en Honduras exigieron más áreas de recreación pública en sus barrios.

“Necesitamos lugares donde poder pasar el rato y salir de nuestras casas”, dijo una joven de Comayagüela en referencia al problema del aislamiento.

Los participantes del mismo vecindario solicitaron apoyo en materia de salud mental, argumentando que muchos jóvenes luchaban contra graves problemas de ansiedad por la situación de violencia a la que están expuestos. Con un solo centro de salud en la zona que atiende a cinco comunidades, el grupo de jóvenes de Comayagüela desearía que hubiera más asistencia de emergencias para atender a los heridos en enfrentamientos armados. Un trabajador humanitario internacional radicado en Tegucigalpa que ejecuta proyectos de atención médica en zonas de alto riesgo también recalcó la falta de inversión en la prestación de servicios médicos en los vecindarios afectados por la violencia de las pandillas. En su experiencia, los sistemas de ambulancias en Honduras no funcionan, lo que significa que “la gente llega a los hospitales casi muertos”.

Los participantes también expresaron su interés en fortalecer las redes locales de participación ciudadana. Los chicos de Comayagüela creían que el apoyo a las organizaciones comunitarias como los “patronatos” podría fomentar la convivencia entre los miembros de la comunidad. Un experto entrevistado coincidió en que los patronatos eran una forma eficaz de acceder a las comunidades, dado su historial de representación comunitaria que les da legitimidad. Una criminóloga hondureña destacó los efectos positivos de una red más reciente de comités locales de prevención de la violencia en Honduras que, a su juicio, merecía una mayor atención de los donantes por su contribución a la reducción de la violencia en las principales zonas urbanas del país. Esta entrevistada explicó que esta red sólo se había probado en proyectos piloto, pero alentó a que se siguiera prestando apoyo a esfuerzos regionales similares de prevención de la violencia a nivel local.

Los duros testimonios de los jóvenes y niños de Honduras evidenciaron los altos niveles de exposición a las armas y a la delincuencia en sus vecindarios, así como su vulnerabilidad y falta de apoyo. El director de una ONG entrevistado en Tegucigalpa criticó el bajo gasto público destinado a la juventud en Honduras, ya que este grupo es el que sufre la violencia más directamente que cualquier otro. Un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales encontró que el gobierno hondureño aumentó sus presupuestos para la educación y la salud en un 11% y un 38% respectivamente entre 2010 y 2016, mientras que aumentó el gasto militar en un 161% durante el mismo período (ICEFI, 2015, p. 29).

### **4.1.3 El Salvador**

En la investigación comunitaria realizada en El Salvador se encontraron condiciones de aislamiento extremo que afectaban a los jóvenes y se evidenció el fenómeno de las fronteras invisibles. Para hacer frente a estos problemas, los participantes de Soyapango pidieron más espacios de recreación pública ubica-

dos estratégicamente en zonas libres de pandillas, donde los jóvenes pudieran caminar libremente sin temor a ser blanco de estos grupos o de la policía.

Todos participantes rechazaron las políticas de “mano dura” argumentando que aumentaban la desconfianza de la comunidad hacia las autoridades policiales. Del mismo modo, el director de una ONG de derechos humanos de El Salvador también condenó algunas de las prácticas orientadas a la persecución del delito por generar una percepción negativa del Estado en general a nivel local. De acuerdo al testimonio de un trabajador social entrevistado, las instituciones públicas salvadoreñas han estado ausentes en muchas comunidades controladas por pandillas. Por ese motivo, las operaciones policiales son una de las pocas interacciones, a menudo muy negativas, que los ciudadanos tienen con el Estado. El gobierno debería, en su opinión, apostar por políticas más amigables:

“La presencia del Estado en el territorio no se trata de traer más policías y militares a las comunidades, sino de [traer] a las instituciones que puedan generar desarrollo dentro de la comunidad”, concluyó.

Un sacerdote luterano entrevistado en San Salvador también expresó su preocupación por el abandono por parte del Estado de algunas zonas con fuerte presencia de pandillas, y consideró fundamental que no se abandonara a quienes vivían en condiciones de extrema violencia.

Los participantes de Soyapango consideraron necesario fortalecer las relaciones comunitarias para aumentar la confianza entre los vecinos, algo que, según la mayoría, podría contribuir en gran medida a la reducción de la violencia armada. Algunos participantes de este grupo señalaron a las iglesias como instituciones respetadas, seguras y neutrales desde las que podrían promover esfuerzos de construcción comunitaria.

En los grupos de Quezaltepeque y Soyapango hubo demandas de espacios para el diálogo intergeneracional entre los miembros de familias, con las iglesias nuevamente presentadas como mediadoras confiables y constructoras de paz de la comunidad. Alineado con las exigencias de los participantes, la Agencia de la ONU contra las Drogas y el Crimen (UNODC) indicó en un informe de 2012 que el apoyo a la familia y las oportunidades de empleo eran factores clave para la reducción de la violencia relacionada con las pandillas. En ese informe se destacó la utilización de medidas alternativas al encarcelamiento como algunas de las opciones para ofrecer vías de salida de la vida delictiva (UNODC, 2012). La defensora de derechos humanos Jeanne Ridders sostuvo en un informe de 2016 sobre violencia comunitaria en El Salvador que los programas de rehabilitación para expandilleros se enfrentan a muchos retos, entre ellos la falta de un marco jurídico y el precedente de un fallo del Tribunal Supremo que califica a los miembros de las pandillas de

“grupos terroristas”. Esto ha cerrado la puerta a la cooperación con muchos actores en este frente (Rikkers, 2016).

## 4.2 Recomendaciones Regionales

### 4.2.1 Las Armas Pequeñas y la Agenda de Seguridad de la Región

Los testimonios de los expertos y los resultados de la investigación comunitaria reflejan el alto nivel de exposición de los ciudadanos del Triángulo Norte frente a las armas de fuego. Niños de tan sólo 8 años en Honduras afirmaron poder identificar un arma según su munición. En Guatemala, un estudiante de secundaria dibujó con sorprendente precisión una pistola con silenciador. Un experto en armas de Honduras señaló que el 60% de las cirugías en este país estaban relacionadas con heridas de bala. En muchas comunidades de El Salvador, “casi todos los problemas se resuelven con armas de fuego”, según un sacerdote.

Esta dura realidad contrasta con el bajo número de iniciativas de control de armas en la región, así como con la falta de atención a esta problemática en las estrategias de seguridad de cada país. Según un informe de 2019 del grupo de la sociedad civil FESPAD, Guatemala es el único país que ha hecho de la reducción de la violencia armada uno de los pilares de su estrategia nacional de prevención de la violencia, dando más relevancia a los proyectos de control de armas (FESPAD, 2019, p. 76). Ni El Salvador ni Honduras han integrado la legislación vigente en materia de armas en sus propios planes de seguridad, lo que hace que las iniciativas de control de armas ocupen un lugar poco relevante a nivel de política pública y se dificulten los esfuerzos para poner en marcha nuevos proyectos. A pesar de la extensa evidencia mencionada en este informe sobre el impacto de las armas pequeñas en la delincuencia, funcionarios entrevistados en la región cuestionaron la necesidad de debatir sobre armas en el ámbito de la prevención de la violencia. Esto sugiere la necesidad de realizar más esfuerzos para enfatizar el vínculo entre la delincuencia y las armas de fuego.

El informe del FESPAD, que abarca la cuestión de las armas pequeñas y su normativa en Guatemala, Honduras y El Salvador, incluye varias buenas prácticas de prevención. El documento cita la importancia de reuniones periódicas entre las fuerzas policiales del Triángulo Norte, así como un proyecto anterior, el Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas (CASAC), puesto en marcha en 2006 por la Organización de los Estados Americanos para vigilar y controlar las armas pequeñas y ligeras mediante la coordinación regional. Según el informe de FESPAD, algunos de los desafíos más urgentes son:

- Promover la armonización de la legislación de armas en los tres países.
- Mejorar las capacidades técnicas de cada país; y,
- Entrenar a los funcionarios de justicia y de la policía encargados de la investigación balística.

Ese informe coincide con las recomendaciones de los expertos entrevistados para este reporte en relación a la prevención del tráfico de armas y el desvío ilegal de las mismas, que son las formas más comunes en las que las armas de fuego terminan en manos tanto de civiles como de delincuentes.

Por último, el documento de FESPAD hace un llamado urgente para proteger a los supervivientes de la violencia armada que a menudo quedan con discapacidades graves y pueden tener dificultades para rehabilitarse después de un ataque.

Los testimonios de la investigación comunitaria sugieren que las campañas educativas para sensibilizar a los niños y los jóvenes sobre los riesgos del uso indebido de las armas pequeñas podrían tener un efecto positivo. Estas podrían incluir campañas de sensibilización sobre las armas a gran escala en los medios de comunicación y sesiones de sensibilización sobre los riesgos con los maestros en las escuelas. En un documento de 2018 publicado por Diálogos se recomendaban iniciativas de sensibilización para educar a los civiles sobre los peligros de portar armas de fuego para su protección y sobre cómo aumentan los incidentes violentos cuando se dispone de armas.

En un informe publicado en 2009 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se destacó el estudio del caso de “Viva Río” en Brasil como un modelo exitoso de campañas de sensibilización sobre las armas. Este proyecto se desarrolló en Río de Janeiro a mediados de la década de 1990, y se dirigió específicamente a los jóvenes que viven en zonas marginales. El proyecto tenía un amplio alcance, incluyendo campañas legislativas y de movilización pública sobre el control de armas. La OCDE señala que, para 2003, Viva Río había contribuido a la aprobación de una nueva ley sobre armas en Brasil, y “se consideró responsable en gran medida por una disminución del 12% en el número de muertes por armas de fuego en Brasil entre 2004 y 2006” (OCDE, 2009, p. 74-77).

Si bien las tasas de homicidio en la región afectan sobre todo a los hombres jóvenes, los testimonios recogidos en Guatemala y Honduras de mujeres y niñas indican que ellas también son víctimas del uso indebido de armas de fuego. El grupo de la sociedad civil, la Red de Acción Internacional sobre las Armas Pequeñas (IANSA por sus siglas en inglés), ha hecho campaña durante años sobre la importancia de incluir una perspectiva de género en las políti-

cas de control de las armas pequeñas, dada la vulnerabilidad de las mujeres. La organización explicó en una declaración de junio de 2018:

“[...] un enfoque de género puede explicar la persistencia de los estereotipos de género socialmente construidos, vinculando la propiedad, el uso y el mal uso de las armas pequeñas a expresiones específicas de masculinidad relacionadas con el control, el poder, la dominación y la fuerza” (IANSA, 2018).

La IANSA destaca la importancia de promover la participación de las mujeres en los órganos de decisión relacionados con el control de armas. Esta es todavía una tarea pendiente en los países del norte de Centroamérica, entre otras cosas porque la mayoría de las instituciones relacionadas con las armas están dirigidas por los militares, cuyos miembros son en su mayoría hombres. IANSA destaca también la necesidad de contar con más datos desglosados por sexo sobre la propiedad de armas para conocer mejor cómo las mujeres se ven afectadas por el uso indebido de las mismas. Una experta en armas de El Salvador destacó que los registros de violencia doméstica no se revisan cuando se examinan las solicitudes de licencias de armas en este país.

Muchos de los entrevistados para este informe reconocieron la disponibilidad de armas de fuego ilegales en barrios vulnerables como consecuencia de las redes de tráfico regionales. Jóvenes que participaron en la investigación comunitaria hablaron abiertamente sobre armas de fuego y municiones, estaban familiarizados con ellas e incluso dijeron que las habían visto o manejado previamente. Expertos en armas en los tres países recomendaron más mecanismos de control a la hora de otorgar licencias de armas para que los propietarios de armas sean debidamente investigados.

En un informe de 2008 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mencionaron los efectos positivos de políticas que reducen la disponibilidad de armas. Entre esas iniciativas figuran las vedas de armas, en las que se



*Autobuses estacionados en una comunidad en Guatemala.*

suspenden las licencias de portar armas durante períodos de tiempo determinados, normalmente los fines de semana que es cuando se producen la mayoría de los actos violentos. En el informe de la OMS se destaca la veda de armas en Cali (Colombia) como un modelo exitoso que contribuyó a una reducción del 14% de los homicidios en esa ciudad durante los años 90 (OMS, 2008, p. 29). El Salvador también ha implementado vedas desde 2006 en municipios específicos que, según una experta entrevistada, han sido exitosas.

En un informe de 2017, los expertos en armas Peter Danssaert y Brian Wood destacaron el problema de los excedentes de armas en El Salvador y recomendaron la destrucción de las mismas. Los autores expresaron su preocupación por el hecho de que los niveles actuales de violencia armada del país son más altos que los registrados durante su conflicto armado, y subrayaron la importancia de proteger los arsenales de almacenamiento militar contra posibles fugas de armas hacia el mercado negro. Según el informe, “[...] estas medidas reducirán la probabilidad de que las armas y municiones caigan en manos equivocadas, pero sólo si los militares mejoran sus procedimientos y si los sistemas de justicia y de aplicación de la ley funcionan eficazmente” (Danssaert y Wood, 2017 p. 7-8).

El informe de la UNODC menciona que el número de armas confiscadas que están custodiadas por el ejército era demasiado alto, por lo que se recomendó a los gobiernos de la región adquirir maquinaria móvil para su destrucción (UNODC, 2012, p. 34).

#### **4.2.2 Prevención de la Violencia dentro de la Comunidad**

Las estrategias de “mano dura” empleadas por los gobiernos de Guatemala, Honduras, y El Salvador para hacer frente a la violencia armada han infligido sufrimiento en comunidades vulnerables, tal y como demuestran los testimonios recogidos en este informe. Los participantes en los tres países describieron con temor operativos policiales que a menudo maltratan a jóvenes y los acusan pertenecer a una pandilla. Las historias de encuentros violentos con la policía eran comunes. Una joven en Honduras afirmó haber sido acosada por un agente. Los expertos en seguridad y los líderes de la sociedad civil entrevistados reconocieron que, aunque es necesario hacer cumplir la ley, los enfoques basados en la persecución del delito tienen consecuencias muy negativas para las personas que viven en zonas de alto riesgo. Por este motivo, aconsejaron que se diera prioridad a los proyectos basados en brindar oportunidades económicas y educativas a los niños y adolescentes estigmatizados, que son los más afectados tanto por la violencia criminal como por la represión.

Los mecanismos alternativos a la “mano dura” pueden reducir de la violencia

de pandillas en la región. En un estudio realizado en 2016 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) sobre proyectos de prevención de violencia basados en la evidencia se menciona el programa para la Reducción de Pandillas y el Desarrollo Juvenil (GRYD por sus siglas en inglés) de Los Ángeles (Estados Unidos) como modelo de referencia. El informe explica que el GRYD dirigió las estrategias de prevención tanto para los miembros de la comunidad como para los jóvenes en riesgo en los focos de violencia de las pandillas. El resultado ha sido, según el informe de USAID que cita datos de los evaluadores del proyecto, una disminución del 48% en ataques violentos, una reducción del 23% en las riñas entre pandillas registradas, y una reducción del 33% en los homicidios.

Los expertos entrevistados en los tres países recomendaron programas de prevención centrados en la comunidad como sustituto de los planes que solo se centran en combatir la delincuencia. Aunque de forma desigual y a menudo incompleta, este tipo de iniciativas ya están en marcha en Guatemala, Honduras, y El Salvador. El modelo guatemalteco de las “COCODES” (Consejos de Desarrollo Comunitario) está siendo implementado en el municipio de Villa Nueva, donde se llevó a cabo la investigación comunitaria de este informe. Según los agentes de policía con un papel de liderazgo en estos consejos, las COCODES han transformado antiguos grupos de vigilantes que surgieron después de la guerra en consejos comunitarios que promueven interacciones pacíficas entre los ciudadanos y las autoridades.



El amor todo lo cree  
todo lo espera y  
todo lo soporta el  
Amor nunca deja de  
Ser.

El amor no es pérdida  
de tiempo.

Brrrrr....

La interpretación de un participante de un versículo de la Biblia: 1 Corintios 13:7.

A diferencia de iniciativas similares en Honduras y El Salvador, las COCODES tienen un historial de coordinación exitosa entre los miembros de la comunidad y las autoridades locales. Los líderes sociales entrevistados que forman parte de las COCODES en Villa Nueva celebraron los resultados positivos del sistema, que según ellos ha creado un espacio para las necesidades de la comunidad y ha facilitado las solicitudes de fondos públicos específicos para proyectos. Según explicaron los participantes, la COCODE principal se subdivide en secciones temáticas que se centran en cuestiones como el desarrollo, la seguridad o las necesidades sociales. El punto clave del modelo es que tanto los ciudadanos como los representantes de las instituciones gubernamentales (como la Fiscalía General

o la policía) asisten activamente a estas reuniones, creando un vínculo entre funcionarios y los ciudadanos.

Según Juan Estrada de la policía local de Villa Nueva, las COCODES también se han convertido en una exitosa herramienta policial ayudando a las autoridades policiales a orientarse más hacia la comunidad y dando a los agentes la oportunidad de interactuar con los ciudadanos en un espacio seguro. Un representante de una ONG internacional para la infancia niños en Guatemala consideró que el impacto de los COCODES en la reconstrucción de las redes comunitarias era evidente.

“Si no estás en las COCODES, no puedes implementar nada”, declaró.

En los últimos años, el grupo de la sociedad civil guatemalteca IEPADES ha liderado los esfuerzos para apoyar el modelo de COCODES en los municipios guatemaltecos que tienen zonas de alto riesgo (como Villa Nueva y Mixco) en el marco del proyecto “Convivimos” que finalizó en 2019. Los miembros de esta institución alentaron a otras organizaciones a seguir apoyando a las COCODES, ya que la financiación para este tipo de iniciativas es todavía muy limitada.

El modelo de El Salvador se ha venido implementando paso a paso desde 2009, cuando el Gobierno puso en marcha sus primeros intentos de prevención de la violencia a nivel comunitario. En el marco del Plan “El Salvador seguro”, las autoridades, con el apoyo del PNUD, crearon consejos locales similares a las COCODES en Guatemala. Sin embargo, la asistencia tanto de los ciudadanos como de las instituciones públicas es más limitada que en el país vecino, y su éxito normalmente depende del liderazgo municipal (International Crisis Group, 2017b).

El gobierno actual de El Salvador ha puesto en pausa casi todas las iniciativas de prevención de las administraciones anteriores, lanzando en su lugar sus propios planes como la creación de un equipo para la “reconstrucción del tejido social”. Los expertos en seguridad entrevistados en El Salvador criticaron lo que consideraron la falta de apoyo real del gobierno a la prevención de la violencia, argumentando que, a pesar de su nueva retórica sobre la seguridad, su política hasta ahora ha sido, en esencia, aplicar el mismo enfoque de “mano dura” que las administraciones anteriores.

Honduras es el país en el que las iniciativas de prevención de la violencia comunitaria están menos desarrolladas. El modelo de “patronatos” mencionado en la sección anterior es el sistema más antiguo de participación ciudadana, aunque se centra principalmente en cuestiones de desarrollo y no de seguridad. Los consejos locales para la prevención de la violencia más recientes, similares a las COCODES, son los proyectos más relevantes en este

sentido. Sin embargo, una experta entrevistada señaló que su aplicación aún es limitada y que por el momento la atención del gobierno nacional a este modelo ha sido mínima. Según su criterio, el Presidente Juan Orlando Hernández tiene más interés en demostrar los resultados de planes más próximos a la “mano dura” que en invertir en nuevos modelos de prevención de violencia.

### 4.2.3 Protección de los Grupos Vulnerables

Según la OMS, las peticiones de los participantes en las entrevistas comunitarias de Guatemala y El Salvador en relación a fortalecer redes de apoyo familiar como mecanismo de resiliencia a la violencia armada han demostrado tener éxito. En un informe de 2010 de esta institución se menciona que el desarrollo de relaciones seguras entre las víctimas y sus padres o personas responsables por su cuidado es un elemento fundamental para prevenir la violencia entre los jóvenes. En un informe más reciente también de la OMS se determina que los programas de visitas a domicilio, en los que enfermeras realizan van periódicamente a los hogares de los niños, son un modelo exitoso para la prevención del abuso infantil. En el informe se menciona que este tipo de proyecto ha tenido éxito en los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos (OMS, 2015, p. 22-23).

El deseo de que se destinen más recursos a la educación y salud fue un denominador común en las discusiones comunitarias. En el informe anual de 2019 sobre homicidios de la UNODC se recoge evidencia de cómo dismi-

nuyen los asesinatos violentos tras aplicar programas de prevención con un enfoque educativo en América Latina:

“[...] esto sugiere que esas políticas [educativas] pueden desempeñar un papel más importante en la reducción de la violencia interpersonal que cualquier otra política específica de prevención del delito o de castigo” (UNODC, 2019a, p. 30).



*Un dibujo que representa la violencia de género en la comunidad por un participante guatemalteco.*

El informe de la OMS de 2015 también recomendó programas extracurriculares como estrategia de prevención ya que éstos llenan los horarios de los jóvenes una vez que terminan la escuela, minimizando sus posibilidades de interacción con grupos delictivos. En el documento se destaca la iniciativa “Abrindo Espaços” (Escuelas Abiertas) puesta en marcha por la UNESCO y el Ministerio de Educación de Brasil en 2004, tras la cual los evaluadores registraron una disminución del 46% de los actos violentos en las zonas cercanas a las escuelas en las que se ejecutó el proyecto (OMS, 2015, p. 37-38).

En cuanto a las preocupaciones en temas de salud mental expresadas tanto por los miembros de la comunidad como por los expertos entrevistados, un informe de 2016 de la USAID destaca los resultados positivos de la terapia psicológica con jóvenes vulnerables en el Triángulo Norte. Sus autores mencionaron que los efectos de la Terapia Conductual Cognitiva (TCC), una técnica psicológica que busca alterar el comportamiento distorsionado, eran notables:

“[La TCC] ha sido eficaz para reducir la reincidencia de los delincuentes jóvenes y adultos, en entornos institucionales o comunitarios [...] ninguna otra intervención en este informe puede igualar su confiabilidad y versatilidad. La TCC se asoció con una disminución promedio relativamente grande del 25% en la reincidencia, pero cuando se utilizaron los tipos más eficaces de TCC, la reincidencia disminuyó en un 52%” (USAID, 2016, p. 14).

Las mujeres y las niñas que participaron en la investigación comunitaria condenaron la frecuencia con la que se cometían abusos físicos y sexuales en sus vecindarios y criticaron la falta de apoyo a las víctimas. En una de las actividades en Guatemala, el grupo de mujeres compartió historias de amigas que no se sentían seguras en su casa porque sufrían violencia doméstica por parte de sus parejas. Según el informe anual sobre homicidios de la UNODC mencionado anteriormente, las mujeres deberían ocupar un lugar central en los enfoques de prevención de violencia dada su extrema vulnerabilidad.

“Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas sentimentales representan la culminación de una violencia prolongada y pueden prevenirse”, concluye el informe al tratar de establecer un vínculo entre la violencia de género y la delincuencia.

Para abordar este problema, este reporte recomienda:

- Entrenar a los funcionarios de las autoridades policiales sobre cómo ayudar a las víctimas de la violencia contra la mujer con mayor sensibilidad;
- Aplicar sentencias más severas para los autores de la violencia doméstica; y

- Aumentar los recursos para las víctimas, como los refugios o las líneas de ayuda.

Una fiscal guatemalteca entrevistada mencionó que en este país se había probado una aplicación móvil de “botón de pánico” para las mujeres víctimas de la violencia machista, el cual consideraba un proyecto piloto prometedor que podría difundirse más en el país.

#### 4.2.4 La Policía Comunitaria

La mayoría de los entrevistados de la investigación comunitaria, independientemente de la edad, el sexo o el país de origen, compartieron impresiones negativas de la policía. Los testimonios muestran una importante falta de confianza en estos servidores públicos, a menudo percibidos como ineficientes o corruptos. Los policías entrevistados en los tres países reconocieron su desapego de las comunidades e identificaron la influencia de las pandillas en algunos vecindarios como el principal desafío para crear apoyo social. Según la UNODC, este problema se debe a menudo a la militarización de la seguridad pública bajo enfoques de “mano dura”. En un informe de 2012 esta institución describió la diferencia entre la policía militarizada y la local de la siguiente manera:

“[...] las fuerzas policiales militarizadas de todo el mundo viven en cuarteles, patrullan en grandes grupos y se les anima a verse a sí mismos como un brazo del estado, independiente de la población. La policía, por el contrario, busca acercarse a la gente, y aumentar la responsabilidad, el contacto y la interacción individual con las comunidades” (UNODC, 2012, p. 76).

Existe evidencia de los efectos positivos de los programas de policía comunitaria. En su informe de 2016, la USAID menciona la eficacia de programas de vigilancia en puntos críticos sobre las incursiones masivas en zonas con una fuerte presencia de pandillas, una aproximación que en el contexto de países del Triángulo Norte parecería más sensata (USAID, 2016, p. 11). Un documento de 2014 de la criminóloga Charlotte Gill analizó 25 estudios sobre la policía comunitaria en todo el mundo y encontró que estos proyectos habían resultado en una percepción pública más positiva de la policía y a una menor percepción de la inseguridad en general (Gill, 2014).

Guatemala, Honduras, y El Salvador han integrado programas de policía comunitaria en sus estrategias de seguridad. Según los agentes de policía entrevistados, el sistema de El Salvador hace más énfasis en la prevención de la violencia social y situacional. En teoría, este modelo se articula con los mencionados comités locales de prevención de la violencia, pero los funcionarios entrevistados admitieron que era difícil mantener una menta-

lidad orientada a la comunidad y al mismo tiempo llevar a cabo operativos antipandillas en las mismas zonas.

En Guatemala existe el “Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria” (MOPASIC). Según su manual, este sistema se basa en delegar las responsabilidades de seguridad pública a equipos policiales pequeños llamados “cuadrantes” que se encargan de articular los esfuerzos de otras unidades especializadas en función de las necesidades de la comunidad (PNC, 2014, p. 9). Según un ex agente de policía, el modelo guatemalteco no selecciona a los agentes de policía dentro de su propia comunidad, sino que los asigna a lugares donde no tienen ninguna conexión con la población local. Este experto explicaba que en otros proyectos pilotos en los que se había empleado a vecinos para llevar a cabo tareas policiales observaron cómo la población local tendía a tomar a las autoridades menos en serio a dado que les conocían previamente.

Honduras implementa el llamado “Modelo catracho” que se centra en la seguridad urbana. En los últimos años, la policía hondureña ha pasado por una intensa reforma que, según un informe del Wilson Center de 2019, ha transformado el liderazgo, el marco legal y la filosofía de la institución. En el informe del Wilson Center se analiza cómo esta institución pasó de ser “el organismo policial de menor confianza en el hemisferio occidental” en 2004 a tener una tasa de confianza del 74,7%, registrada en 2017 en una encuesta del Ministerio de Seguridad (Dye, 2019, p. 3-6,37). Su autor David R. Dye explica que, aunque el proceso de reforma de la policía ha demostrado logros importantes, “[...] Habrá que hacer mucho más para consolidar el compromiso de establecer relaciones eficaces entre la policía y la comunidad y potenciar los limitados avances logrados hasta la fecha en materia de legitimidad y credibilidad de la policía” (Dye, 2019, p. 45).



*Un grupo de adolescentes durante una sesión de investigación en Guatemala discutiendo soluciones para un barrio libre de violencia.*

En este estudio también se mencionan los desafíos para el “modelo catracho”, incluida la resistencia de los policías de alto rango con mentalidad más militar que se oponen al modelo; los escasos recursos económicos; y la frecuente rotación de patrulleros.

# 5.

## Conclusión

Las primeras secciones de este informe contextualizaron las causas fundamentales del problema de las armas pequeñas en el Triángulo Norte. Tras varias décadas de guerras civiles en El Salvador y Guatemala durante las cuales armar a los civiles fue un aspecto central del conflicto, las autoridades públicas no llevaron a cabo un completo proceso de desarme. Los riesgos de esta tarea inacabada se incrementaron en un clima de aumento de la criminalidad a finales de los años 1990 y principios de los 2000. La expansión de grupos como pandillas callejeras y narcotraficantes llevaron a muchos ciudadanos a comprar armas para protegerse en unos vecindarios cada vez más inseguros. El aumento de la demanda, así como del sector de la empresa de seguridad privada, dio como resultado un mayor número de armas legales desviadas hacia el mercado negro, donde tanto ciudadanos como grupos delictivos encontraron un suministro más barato de armas.

La revisión bibliográfica contextualizó cómo, para hacer frente a los altos niveles de violencia, los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador han implementado estrategias de “mano dura” basadas en la militarización de la seguridad pública y el encarcelamiento masivo supuestos de miembros de maras y pandillas. Estos grupos son, según funcionarios entrevistados, las principales fuentes de violencia en la región. Las tasas de homicidio han disminuido en los últimos años, un hecho que los gobiernos atribuyen a estas iniciativas basadas en la persecución del delito. Sin embargo, este informe no encontró evidencia para relacionar la reducción de las tasas de homicidios con estas políticas. De hecho, la investigación comunitaria sugiere que la “mano dura” ha tenido más bien un impacto negativo en la población. Participantes de los tres países rechazaron los planes de sus gobiernos para combatir la delincuencia en sus vecindarios, argumentando que estos habían aumentado la desconfianza tanto entre vecinos como hacia las autoridades. Los expertos en seguridad entrevistados también subrayaron con preocupación esta dinámica, asegurando que estas políticas habían puesto a miembros de la comunidad “en contra del Estado”, contribuyendo a la estigmatización de los vecindarios bajo la influencia de las pandillas.

Las descripciones que hacen los participantes sobre la vida cotidiana en sus comunidades evidencian su extrema vulnerabilidad ante la violencia armada. Muchos describieron cómo las pandillas son la autoridad de facto en sus vecindarios, ejerciendo un rígido control territorial y castigando violentamente a quienes ingresan en territorios de los grupos rivales. Jóvenes

de El Salvador confesaron que viven en condiciones de total aislamiento, confinados casi permanentemente en sus propios vecindarios y, a veces, en sus propias casas. Los adolescentes de Guatemala también lamentaron que, además de la violencia de las pandillas, a menudo son también víctimas de abusos policiales y son acusados sin pruebas de pertenecer a grupos criminales. Niños entrevistados en Honduras dijeron que habían presenciado homicidios cerca de sus casas, y que sus familiares habían sido asesinados por pandillas. Esta realidad tiene, según los propios participantes, efectos psicológicos y físicos devastadores. Los expertos entrevistados observaron cómo las personas que viven en zonas vulnerables se han vuelto pasivas ante la violencia y se han acostumbrado al miedo, la desconfianza social y la estigmatización constante.

La carga de las mujeres y las adolescentes que viven en las comunidades seleccionadas para esta investigación no es menor. Aunque los hombres son a menudo las víctimas mortales de los asesinatos violentos, la revisión bibliográfica muestra que las mujeres son con frecuencia sobrevivientes de la violencia armada. Las participantes de los grupos en los que únicamente participaron mujeres en Guatemala y Honduras describieron numerosas formas de violencia de género que ocurren en sus vecindarios, incluidos los abusos físicos, sexuales y domésticos. Cuando se les preguntó acerca de posibles soluciones, las participantes exigieron más iniciativas para que las mujeres se sintieran más seguras en la comunidad, como autobuses exclusivos para mujeres, o más servicios públicos dedicados a ayudar a las víctimas de la violencia machista. En el presente informe recoge otros estudios sobre cómo la inversión en la prevención de la violencia de género repercute positivamente en el problema general de la seguridad, siendo esta forma de violencia una parte fundamental de la violencia estructural que sufren en esos países.

Las duras realidades en las comunidades a menudo se vuelven insoportables para los ciudadanos, muchos de los cuales se ven obligados a huir. La formación de caravanas de migrantes, que son, entre otros factores, consecuencia de la violencia a nivel comunitario, ejemplifica la gravedad de la situación humanitaria en el norte de Centroamérica. Este tema ha trascendido la esfera local, convirtiéndose en una prioridad para los gobiernos de toda la región ya que los acuerdos migratorios han llegado a ocupar un lugar primordial en la agenda de las instituciones políticas de Estados Unidos, México y Centroamérica (Hackman, 2019).

Este informe recopila evidencia sobre el vínculo entre las armas pequeñas y la crisis de seguridad en Guatemala, Honduras y El Salvador. El ejemplo más claro es que, en promedio, 8 de cada 10 homicidios en estos países se cometen con un arma de fuego. Puede que las armas no sean la causa directa

de los crímenes, pero sin duda son un factor determinante en el ejercicio de la violencia. Esto es especialmente cierto en las comunidades con una fuerte presencia criminal donde, según los expertos, las armas de fuego son el instrumento más eficaz para infundir miedo y control social por parte de las pandillas. Los participantes más jóvenes hicieron una asociación directa entre las armas y la vida cotidiana en sus comunidades y aseguraron haberse acostumbrado a su presencia. La falta de conciencia sobre los riesgos asociados al uso indebido de armas de fuego quedó clara durante la actividad en la que se pidió a los jóvenes y niños que eligieran algún elemento con el cual defenderse: el arma fue la primera opción en casi todos los casos.

Paradójicamente, las iniciativas de control de armas han sido escasas, y por lo general se han mantenido separadas de las estrategias de seguridad de cada país. Guatemala es el único país que cuenta con una sección dedicada a la reducción de la violencia armada en su estrategia nacional de prevención de la violencia. En El Salvador y Guatemala, el control de las armas se contempla en una legislación especial, lo cual dificulta la integración de nuevas iniciativas en los marcos normativos existentes. Sin embargo, varias fuentes citadas en el presente informe mencionan la necesidad de reforma en este sentido. Entre las posibilidades que vale la pena explorar se encuentran la realización de campañas de sensibilización sobre los riesgos de las armas de fuego en las escuelas y las iniciativas para poner a prueba el impacto de las prohibiciones de armas, que parecen haber dado resultados positivos en El Salvador. Para evitar la desviación de armas legales hacia el mercado negro, este informe citó recomendaciones relacionadas con la cooperación regional contra el tráfico de armas; la mejora en las capacidades técnicas de los funcionarios públicos en materia de balística; y la destrucción de los excedentes de armas. El apoyo a los supervivientes de la violencia armada sigue siendo escaso en los tres países y debería mejorarse. Por último, un enfoque de género en todas las futuras iniciativas de control de armas las haría más relevantes.

La investigación comunitaria apuntó hacia una mayor participación ciudadana y mejores oportunidades de empleo y educación como las soluciones para la violencia armada. La revisión bibliográfica mostró cómo la desigualdad económica de la región, los índices de pobreza y la baja escolarización tienen un impacto directo sobre los niveles de violencia armada. El fortalecimiento de las redes comunitarias fue una exigencia clara de los participantes, quienes solicitaron más espacios para la interacción entre ciudadanos y las autoridades públicas. Un mayor apoyo al modelo guatemalteco de las COCODES y los comités municipales de prevención de la violencia en El Salvador y Honduras podría tener un impacto positivo para restablecer la confianza dentro de las comunidades, actualmente en riesgo como consecuencia de la violencia de pandillas y las políticas de “mano dura”. En el largo plazo, los ex-

ertos en seguridad confían en que esos modelos puedan ofrecer soluciones sostenibles, reduciendo los asesinatos violentos en la región.

La desconfianza hacia la policía se mencionó repetidamente en los encuentros comunitarios. En ocasiones, los participantes consideraron que las pandillas tenían más control sobre sus vecindarios que los agentes de las fuerzas de seguridad. Agentes de policía entrevistados reconocieron las dificultades para interactuar con ciudadanos en contextos sumamente violentos, y afirmaron que muchas comunidades consideran a las pandillas como protectores y no como generadores de violencia. Un modelo de policía comunitaria, que ya se está en marcha en los tres países del Triángulo Norte, podría crear oportunidades para establecer relaciones más estrechas entre las autoridades policiales y las comunidades vulnerables, y mejorar la imagen pública del Estado. Varios estudios mencionados en esta investigación demuestran los efectos positivos de una policía orientada hacia la comunidad, un modelo que podría promoverse mucho más para que los ciudadanos tengan experiencias más positivas del Estado y disminuya la influencia de las pandillas en los barrios de alto riesgo.

A pesar de la tendencia histórica de los gobiernos del Triángulo Norte a enfrentar el problema de la inseguridad con medidas basadas en la persecución del delito, los actores de la cooperación y las ONG en Guatemala, Honduras y El Salvador dispuestas a apoyar futuros esfuerzos en prevención de la violencia armada deberían considerar las recomendaciones incluidas en este informe para que, a la hora de diseñar y ejecutar proyectos tan necesarios a nivel comunitario, se tengan en cuenta la realidad de las personas que conviven a diario con esta lacra.



*Un barrio en Guatemala.*

# Referencias

- Abt, Thomas y Winship, Christopher. "What Works In Reducing Community Violence: A Meta-Review and Field Study for the Northern Triangle", USAID, Febrero de 2016. <http://bit.ly/2oJtHeQ>
- "Agencias privadas dirigen un ejército de 100.000 guardias", La Prensa, 10 de junio de 2018. <http://bit.ly/2nZzVqo>
- Aguilar, Jeannette. "Las políticas de seguridad pública en El Salvador, 2003-2018", Heinrich-Böll-Stiftung, 14 de marzo de 2019. <http://bit.ly/2n2ihm2>
- Aguilar, Jeannette y Andrade, Laura. "La percepción de la seguridad y la confianza en las instituciones públicas", USAID, marzo de 2017. <http://bit.ly/2mobLpj>
- Bendaña, Alejandro. "Sources of Weapons Procurement, Diffusion and Violence in Central America", en Small Arms Control: Old Weapons, New Issues, Londres: Routledge, 1999.
- Bevan, Anna-Claire. "Guatemala renueva la Policía Nacional Civil ante el aumento del delito", Diálogo Américas, 21 de agosto de 2013. <http://bit.ly/2nZAsso>
- Bott, S., Guedes, A., Goodwin, M., y Adams Mendoza, J. "Intimate partner violence in the Americas: a systematic review and reanalysis of national prevalence estimates", Rev Panam Salud Publica, 43, (2019): 6. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.26>.
- Bott, S., Guedes, A., Goodwin, M., y Adams Mendoza, J. "Violence Against Women in Latin America and the Caribbean", Informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2014, 22, <http://bit.ly/2mkeCIS>.
- De León, Carmen Rosa. "Control de Armas de Fuego", Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Diciembre de 2006a. <http://bit.ly/2o2aULd>
- De León, Carmen Rosa. "Armas pequeñas y desarrollo en sociedades post conflicto", Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible y XXX-REDCEPAZ IEPADES, Cuaderno nº 6 (Guatemala: Julio de 2006b). <http://bit.ly/2nYijLw>
- CICIG, "Armas de fuego y municiones en Guatemala", Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Guatemala: 2009. <http://bit.ly/2nTOtbI>
- CICIG, "Informe de cierre: el legado de la justicia en Guatemala", Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Guatemala: 2019. <http://bit.ly/2oCBhaV>
- Cruz, J. M. "Criminal Violence and Democratization in Central America: The Survival of the Violent State." Latin American Politics and Society. 53.4 (2011): 1.
- Cruz, J. M., Aguilar, J. y Vorobyeva, Yulia. "Legitimidad y confianza pública de la policía en El Salvador", Florida International University (FIU) y la Universidad Centroamericana en El Salvador (UCA), julio de 2017. <http://bit.ly/2nXDZHN>

- Cruz, J. M. y Beltrán, M. A. “Las armas de fuego en El Salvador”, IUDOP-UCA, San Salvador: 2000.
- Cruz, J. M., Rosen, J. D., Amaya, L. E., Vorobyeva, Y. “The New Face of Street Gangs: The Gang Phenomenon in El Salvador”, Kimberly Green Latin American and Caribbean Centre, Jack D. Gordon Institute for Public Policy, y Florida International University, 2017. <http://bit.ly/2nfRToz>.
- Chávez, Suchit. “Los dueños de la seguridad privada en Guatemala”, la Plaza Pública, 10 de marzo de 2019. <http://bit.ly/2ndrdoq>
- Chayes, Sarah. “When The Corruption Is The Operating System: The Case of Honduras”, Carnegie Endowment for International Peace, Nueva York: 2017. <http://bit.ly/2oCCgrD>
- Dalby, Chris y Carranza, Camilo. “InSight Crime’s 2018 Homicide Round-Up”, Insight Crime, 22 de enero de 2019. <http://bit.ly/2o5Q9yu>.
- Danssaert, Peterand Wood, Brian. “Surplus and Illegal Small Arms, Light Weapons and their Ammunition: the consequences of failing to dispose and safely destroy them”, IANSA y IPIS, 11 de agosto 2017. <http://bit.ly/2moLqzX>
- Diálogos, “Informe Anual sobre la violencia homicida en Guatemala, año 2018”, abril 2019. <http://bit.ly/2mmAk5R>.
- Diálogos, “Informe sobre la violencia homicida en Guatemala: del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018”, julio de 2018. <http://bit.ly/2o1ZBCJ>
- Diálogos, “La violencia homicida contra las mujeres en Guatemala”, el Boletín de Seguridad y Justicia nº 1, marzo de 2018. <http://bit.ly/2oKUw2i>
- Dye, David R. “Police Reform In Honduras”, Wilson Center, 21 de junio de 2019. <http://bit.ly/2nWornF>
- Ministerio de Economía de El Salvador, “Encuesta Nacional de Violencia Contra la Mujer: El Salvador 2017”, Gobierno de la República de El Salvador, Ministerio de Economía, agosto de 2018. <http://bit.ly/2nn1Tw5>
- “Ejército de Guatemala investiga robo de armas y municiones”, AFP-El Faro, 6 de enero de 2012. <http://bit.ly/2oIUKXH>
- “Estrategia Nacional de Prevención de la violencia y el Delito”, Gobierno de Guatemala, 2018.
- FESPAD, “Impact of small arms and light weapons on public security, culture of peace and sustainable development in the northern region of Central America”, Fountation of Applied Legal Studies (FESPAD), 2019.
- Fisas, Vicenç. “Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes”, Quaderns de construcció de pau No. 24, Escola de Pau, (Barcelona: 2011).

- From Madness to Hope: The 12-Year War in El Salvador: Report of the Commission on the Truth for El Salvador. Nueva York: Naciones Unidas, 1993. Impreso. <http://bit.ly/2na7eqR>
- Fundación Myrna Mack, “Impunidad y redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala”, Guatemala: agosto de 2017. <http://bit.ly/2o0PI8I>
- Gill, C., Weisburd, D., Telep, C. D., y Bennett, T. “Community-oriented policing to reduce crime, disorder and fear and increase satisfaction and legitimacy among citizens: a systematic review”, *Journal of Experimental Criminology*, 10(4), 399-428, 2014. doi: 10.1007/s11292-014-9210-y
- Godnick, W., Muggah, R., Waszink, C. “Stray Bullets: The Impact of Small Arms Misuse in Central America”, *Small Arms Survey, Occasional Paper No. 5*, 2002. <http://bit.ly/2nWfqLv>
- Gómez Hecht, J. R. “Las agencias de seguridad privada en El Salvador”, *Colegio de Altos Estudios Estratégicos*, San Salvador: 2014. <http://bit.ly/2nSsC3T>
- Gobierno de Canadá, “Immigration and Refugee Board of Canada, El Salvador”, SLV3385, 1989. <http://bit.ly/2n9VEfl>
- Gutiérrez, David. “El Salvador’s Consumer Goods for Firearms Programme”, en *Small Arms Control: Old Weapons, New Issues*, Londres: Routledge, 1999.
- Gutiérrez Rivera, Lirio. “Discipline and Punish? Youth Gangs” Response to “Zero-tolerance” Policies in Honduras”, *Bulletin of Latin American Research*, 29: 492-504. doi:10.1111/j.1470-9856.2010.00415.x
- Hackman, Michelle. “U.S. Asylum Pact With Honduras Cements Trump Administration’s Regional Strategy”, *The Wall Street Journal*, actualizado por última vez el 25 de septiembre de 2019. <https://on.wsj.com/2o5mLZ5>
- Hernández, Marlon Anzora. “Las maras y la nueva guerra salvadoreña”, *Nueva Sociedad*, nº 263, mayo-junio de 2016, Buenos Aires: 2016. <http://bit.ly/2nZlbYU>
- Holden, Robert H. *Armies without Nations: Public Violence and State Formation in Central America 1821-1960*. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2004.
- IANSA, “Small Arms, Big Harms: A Call to Action by Civil Society on Gender and Small Arms Control”, *International Action Network on Small Arms (IANSA)*, Junio de 2018. <http://bit.ly/2mpOJ1b>
- ICEFI, “Honduras: Una política social que no mejora el presente ni construye el futuro”, *Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)*, 19 de noviembre de 2015. <http://bit.ly/2nVKlaO>.
- “Informe Latinobarómetro 2018”, *Corporación Latino barómetro*, noviembre de 2018. <http://bit.ly/2nbaW3u>
- “Infosegura”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) En El Salvador, consultado por última vez el 22 de diciembre de 2019, <http://bit.ly/31YxoQ>.

- International Crisis Group, “Mafia of the Poor: Gang Violence and Extortion in Central America”, Latin America Report No. 62, 6 de abril de 2017. <http://bit.ly/2mot7lZ>
- International Crisis Group, “El Salvador’s Politics of Perpetual Violence”, Latin America Report No. 64, 19 de diciembre de 2017. <http://bit.ly/2tldtuO>
- International Crisis Group, “Fight and Flight: Tackling the Roots of Honduras’ Emergency”, Latin America Report N°77, 25 de octubre de 2019. <http://bit.ly/35POiyC>
- Karp, Aaron. “Annex: Civilian Firearms Holdings, 2017”, en “Estimating Global Civilian-held Firearms Numbers”, Documento informativo de Small Arms Survey, Junio de 2018a. <http://bit.ly/2ol7Hqv>.
- Karp, Aaron. “Annex: Law Enforcement Firearms Holdings, 2017”, en “Estimating Global Law Enforcement Firearms Numbers”, Documento informativo de Small Arms Survey, Junio de 2018b. <http://bit.ly/2nzoZjl>.
- Karp, Aaron. “Annex: Military Firearms Holdings, 2017”, en “Estimating Global Military-owned Firearms Numbers”, Documento informativo de Small Arms Survey, Junio 2018c. <http://bit.ly/2oletN3>.
- Kleck, Gary. “The Impact of Gun Ownership Rates on Crime Rates: A Methodological Review of the Evidence”, Journal of Criminal Justice, 43, (2015). <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2014.12.002>.
- Laguan, Jonathan. “¿Con cuántos policías cuenta la PNC para todo el territorio de El Salvador?”, La Prensa Gráfica, 26 de diciembre de 2017. <http://bit.ly/2oHEc2q>.
- “Ley de Armas y Municiones”, Decreto N° 15-2009, República de Guatemala.
- “Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares”, Decreto N° 655, Asamblea Legislativa de El Salvador, 1999.
- “Ley de Control de Armas de Fuego”, Congreso Nacional de Honduras, mayo de 2019.
- Martínez, Carlos. “Que el arma es una solución es un invento que viene de las películas”, El Faro, 16 de julio 2010. <http://bit.ly/2oQSzBq>.
- Martínez, Carlos. “Fiscal investiga a ministro de Defensa por tráfico de armas”, El Faro, 11 de junio de 2014. <http://bit.ly/2mjpbSs>.
- Martínez, O. Lemus, E. Martínez, C. y Sontag, D. “Killers on a Shoestring: Inside the Gangs of El Salvador”, The New York Times, 20 de noviembre de 2016. <https://nyti.ms/2mvqL4Q>.
- Melara, Michelle. “Desarrollo de los servicios privados de seguridad en El Salvador”, in La seguridad privada en Centroamérica, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, San José: mayo de 2003.
- Montti, R. M., Bolaños Vásquez, H. J., y Cerén Lovo, A. M. “Feminicidios: Situación de violencia letal contra las mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras”,

- Heinrich-Böll-Stiftung, 27 de febrero 2019. <http://sv.boell.org/es/node/235>.
- Muggah, R. Garzón J. C., Suárez, M. “Mano Dura: the costs and benefits of repressive criminal justice for young people in Latin America”, Igarapé Institute, abril de 2018. <http://bit.ly/2naTLPx>
- NRC, “Extreme violence, treacherous journeys and invisible borders”, Briefing Note, Norwegian Refugee Council (NRC), Diciembre 2016. <http://bit.ly/2sxZrWp>
- Olson, E. L. “Crime and Violence in Central America” s Northern Triangle: How U.S. Policy Responses are Helping, Hurting, and Can be Improved”, Wilson Centre, Washington, DC: 2015. <http://bit.ly/2oJ97eA>
- OCDE, “Armed Violence Reduction: Enabling Development”, Conflict And Fragility Series, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2009. <http://bit.ly/2o1AG2c>.
- Pearce, Jenny, Richmond, Oliver P., Sandra, y Pogodda Ramović, Jasmin. Central America: From War to Violence. Palgrave Macmillan, 2016.
- “Plan El Salvador Seguro”, Consejo Nacional de seguridad Ciudadana y Convivencia, 2014.
- PNC, “Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria (MOPSIC)”, Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), 2014.
- “Policía Nacional espera tener 20.000 agentes en 2019”, Presidencia de Honduras, comunicado de prensa, 2 de enero de 2019. <http://bit.ly/2nUTzny>
- “Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms”, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/52/298, 27 de agosto de 1997.
- Ridders, Jeanne. “Retos del desarrollo comunitario en contextos violentos”, Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD), San Salvador: diciembre de 2016. <http://bit.ly/2mZkKxz>
- Rísquez, Ronna. “7 Keys to Understanding Honduras” Declining Homicide Rate”, Insight Crime, 15 de noviembre 2017. <http://bit.ly/3719xO8>
- Rothenberg, Daniel., y Comisión Para El Esclarecimiento Histórico. Memory of Silence: The Guatemalan Truth Commission Report. 1st ed. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Salomón, Leticia. “El desempeño policial y la satisfacción de la ciudadanía”, PNUD 2004, 8. <http://bit.ly/2nfyjZN>
- Schuberth, M. “Beyond Gang Truces and Mano Dura Policies: Towards Substitutive Security Governance in Latin America”, Stability: International Journal of Security & Development, 5(1): 17 de diciembre de 2016, 1-20. DOI: <http://dx.doi.org/10.5334/sta.450>.
- Striffler S., Moberg M. Banana Wars: Power, Production, and History in the Ameri-

- cas. Durham: Duke University Press, 2003.
- El Banco Mundial, “Crime and Violence in Central America: A Development Challenge”, 2011. [Http://bit.ly/2oHHX7S](http://bit.ly/2oHHX7S)
- El Banco Mundial, “Intentional homicides (per 100,000 people): Honduras”, consultada el 25 de septiembre de 2019. [Http://bit.ly/2odFmSW](http://bit.ly/2odFmSW)
- El Banco Mundial, “Datos de libre acceso del Banco Mundial”, consultado por última vez el 22 de diciembre de 2019, <https://data.worldbank.org/>
- El Banco Mundial, “Urban Violence: A Challenge of Epidemic Proportions”, 6 de septiembre de 2016. <http://bit.ly/2o7ZB4x>
- El Banco Mundial, “El Banco Mundial en Guatemala”, el sitio Web del Banco Mundial, consultado por última vez el 22 de diciembre de 2019. 2019b. <https://www.worldbank.org/en/country/guatemala>.
- El Banco Mundial, “El Banco Mundial en Honduras”, el sitio Web del Banco Mundial, consultado por última vez el 22 de diciembre de 2019. <https://www.worldbank.org/en/country/honduras>. 2019a.
- El Banco Mundial, “El Banco Mundial en El Salvador”, el sitio Web del Banco Mundial, consultado por última vez el 22 de diciembre de 2019. 2019c. <https://www.worldbank.org/en/country/elsalvador>.
- UCA, Maras y Pandillas en Centroamérica: Volumen I, ERIC, IDESO, IDIES, IUDOP, (Managua: 2001).
- PNUD, “Armas de fuego y violencia”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 23 de junio de 2015. [Http://bit.ly/2PSO8Qh](http://bit.ly/2PSO8Qh)
- UNDP, “Citizen Security With A Human Face: Evidence and Proposals for Latin America”, Regional Human Development Report 2013-2014, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panamá: noviembre de 2015. [Http://bit.ly/2nW7ERE](http://bit.ly/2nW7ERE)
- ACNUR, “Appeal for Expanding Operations in Central America”, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), febrero de 2019, <http://bit.ly/37qssIX>
- ACNUR, “North of Central America Situation. April 2019”, hoja de datos de la ACNUR, mayo de 2019. [Http://bit.ly/2QuqoIT](http://bit.ly/2QuqoIT)
- UNODC, “Executive Summary”, Global Study on Homicide 2019. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Viena: 2019a). [Http://bit.ly/2oHd1of](http://bit.ly/2oHd1of)
- UNODC, “Homicide, development and the Sustainable Development Goals”, Global Study on Homicide 2019. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Viena: 2019b) <http://bit.ly/2ml2UVE>
- UNODC, “Homicide trends, patterns and criminal justice response”, Global Study

- on Homicide 2019. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Viena: 2019c). [Http://bit.ly/2nS2qGB](http://bit.ly/2nS2qGB)
- UNODC, “Understanding Homicide”, Global Study on Homicide 2019. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Viena: 2019d). <http://bit.ly/2Mix7yc>
- UNODC, “Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment”, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Viena: 2012).
- Valencia, Roberto. “El 80 % de las armas que las pandillas entregaron durante la Tregua Esteban en buen estado”, El Faro, 13 de marzo de 2016. <http://bit.ly/2m-rZ7FQ>
- Valencia, Roberto. “En El Salvador, los asesinatos disminuyen y el presidente tuitea”, 1 de noviembre de 2019. <https://wapo.st/2SUvBWM>
- “Violence Prevention: The Evidence”, Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra: 2010. <http://bit.ly/2mqAIR1>
- Whitfield, Teresa. “Mediating criminal violence: Lessons from the gang truce in El Salvador”, Oslo Forum Papers, No. 1, junio 2013. <http://bit.ly/2oHZAEB>
- OMS, “Preventing Youth Violence, an overview of the evidence”, Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra: 2015. <http://bit.ly/2nUUHYv>
- OMS, “Statistical report on violence in Guatemala”, Organización Mundial de la Salud, consultado el 25 septiembre 2019. <http://bit.ly/2m0uuqP>.
- Wolf, Sonja. Mano Dura: La política de control de pandillas en El Salvador, Austin: 2017.
- “World Population Prospects 2019”, Naciones Unidas DAES/División de Población, consultado por última vez el 25 de septiembre de 2019. <http://bit.ly/2o5UMsk>.
- Valencia, Roberto. “En El Salvador, los asesinatos disminuyen y el presidente tuitea”, 1 Noviembre 2019. <https://wapo.st/2SUvBWM>.

# Anexos

## Anexo 1. Metodología de la Investigación Comunitaria

Tabla 1. Investigación comunitaria en Guatemala

	Fecha	Ubicación	Número y perfil de los participantes	Tema de la sesión
Sesión 1. Debate grupal, mujeres	22 de julio de 2019	Villanueva, Guatemala	8 participantes, mujeres de mediana edad que viven en una comunidad seleccionada de Villanueva	Debate: "El papel de la mujer en la comunidad".
Sesión 2. Debate grupal, estudiantes de secundaria	23 de julio de 2019	Villanueva, Guatemala	13 participantes, 10 niños y 3 niñas, todos estudiantes con edades entre los 13 y 18 años que asisten a una escuela secundaria en una comunidad seleccionada de Villanueva.	Debate: "La vida diaria en la comunidad.
Sesión 3. Debate grupal, mujeres	30 de julio de 2019	Villanueva, Guatemala	8 participantes, mujeres de mediana edad que viven en una comunidad seleccionada de Villanueva	Debate: "¿Qué tan segura me siento en mi comunidad?"
Sesión 4. Debate grupal, estudiantes de secundaria	30 de julio de 2019	Villanueva, Guatemala	14 participantes, todos estudiantes con edades entre los 13 y 18 años que asisten a una escuela secundaria en una comunidad seleccionada de Villanueva	Debate: "La percepción de inseguridad de las chicas versus la de los chicos"
Sesión 5. Debate grupal, mujeres	6 de agosto de 2019	Villanueva, Guatemala	5 participantes, mujeres de mediana edad que viven en una comunidad seleccionada de Villanueva	Juegos de rol: "¿Qué arma escogerías para protegerte?"

Fecha	Ubicación	Número y perfil de los participantes	Tema de la sesión	
Sesión 6. Debate grupal, estudiantes de secundaria	7 de agosto de 2019	Villanueva, Guatemala	13 participantes, todos estudiantes con edades entre los 13 y 18 años que asisten a una escuela secundaria en una comunidad seleccionada de Villanueva	Ejercicio de dibujo: "Vivir en la comunidad" y Juegos de Rol: "¿Qué arma escogerías para protegerte?"
Sesión 7. Debate grupal, estudiantes de secundaria	14 de agosto de 2019	Villanueva, Guatemala	18 participantes, todos estudiantes con edades entre los 13 y 18 años que asisten a una escuela secundaria en una comunidad seleccionada de Villanueva	Debate: "Soluciones para un barrio libre de violencia"
Sesión 8. Debate grupal, mujeres	21 de agosto de 2019	Villanueva, Guatemala	9 participantes, mujeres de mediana edad que viven en una comunidad seleccionada de Villanueva	Debate: "Soluciones para un barrio libre de violencia"

\* En esta actividad específica, el líder del debate planteó escenarios peligrosos hipotéticos en la comunidad, y pidió a los participantes que escogieran un arma para defenderse (incluyendo un cuchillo, una pistola, un gas pimienta, un bate de béisbol o ninguno).

\*\* En esta actividad, se les solicitó a las participantes que dibujaran su comunidad, y más tarde hicieron un ejercicio similar al de la sesión 5 con el grupo de debate de mujeres para elegir entre diferentes armas para defenderse en escenarios hipotéticos.

**Tabla 2. Investigación comunitaria en Honduras**

Fecha	Ubicación	Número y perfil de los participantes	Tema de la sesión	
Sesión 1. Debate grupal, adolescentes*	24 de julio de 2019	Comayagüela, Distrito Central, Honduras	12 participantes, 4 chicos y 8 chicas adolescentes, que viven en una comunidad seleccionada de Comayagüela	Ejercicio de dibujo: "mi percepción de la vida diaria en la comunidad".
Sesión 2. Debate grupal, niños	26 de julio de 2019	Comayagüela, Distrito Central, Honduras	11 participantes, niños y niñas que viven en una comunidad seleccionada de Comayagüela.	Juego de roles: "Mis poderes de superhéroe"***

	Fecha	Ubicación	Número y perfil de los participantes	Tema de la sesión
Sesión 3. Debate grupal, chicas adolescentes	30 de julio de 2019	Comayagüela, Distrito Central, Honduras	10 participantes, chicas adolescentes, que viven en una comunidad seleccionada de Comayagüela	Debate: "La inseguridad desde una perspectiva de género"
Sesión 4. Debate grupal, chicos adolescentes	1 de agosto de 2019	Comayagüela, Distrito Central, Honduras	7 participantes, jóvenes que viven en una comunidad seleccionada de Comayagüela	Debate: "¿Qué arma escogerías para protegerte?"***
Sesión 5. Debate grupal, chicas adolescentes	10 de agosto	Comayagüela, Distrito Central, Honduras	11 participantes, mujeres jóvenes que viven en una comunidad seleccionada de Comayagüela	Juego de roles: "¿Qué arma escogerías para protegerte?"***
Sesión 6. Debate grupal, niños	14 de agosto de 2019	Tegucigalpa, Honduras	14 participantes, 8 niños y 6 niñas que viven en una comunidad seleccionada de Tegucigalpa	Juego de roles: "¿Qué arma escogerías para protegerte?"***
Sesión 7. Debate grupal, niños	14 de agosto de 2019	Tegucigalpa, Honduras	10 participantes, 5 niños y 5 niñas que viven en una comunidad seleccionada de Tegucigalpa	Debate: "¿Qué tan seguro me siento en mi comunidad?"
Sesión 8. Debate grupal, chicas adolescentes	17 de agosto de 2019	Comayagüela, Distrito Central, Honduras	13 participantes, 11 chicos y 2 chicas que viven en una comunidad seleccionada de Tegucigalpa	Debate: "recomendaciones para construir mi comunidad ideal"

\* La primera sesión con los adolescentes fue mixta, pero durante las siguientes sesiones se separaron los chicos y las chicas para facilitar la discusión y animar a las chicas a hablar más abiertamente sobre la violencia en su comunidad.

\*\* Esta actividad fue un debate interactivo con un juego de roles en el que los niños que participaron se disfrazaron de "superhéroes" y se les pidió que eligieran un "superpoder" para defenderse y luchar contra el mal. La lógica de la actividad era poner a prueba la opinión de los niños sobre las armas como un posible "superpoder" para protegerse de situaciones peligrosas en la comunidad y discutir los problemas de inseguridad de manera indirecta.

\*\*\* En esta actividad específica, el líder del debate planteó escenarios peligrosos hipotéticos en la comunidad, y pidió a los participantes que escogieran un arma para defenderse (incluyendo un cuchillo, un objeto afilado, un gas pimienta, una sartén y una pistola).

**Tabla 3. Investigación comunitaria en El Salvador**

	Fecha	Ubicación	Número y perfil de los participantes	Tema de la sesión
Sesión 1. Debate grupal, hombres jóvenes	3 de agosto de 2019	Soyapango, San Salvador, El Salvador	8 participantes, hombres en sus 20s que viven en una comunidad seleccionada de Soyapango	Debate: "La vida diaria en mi comunidad"
Sesión 2. Debate grupal, padres	3 de agosto de 2019	Quezaltepeque, La Libertad, El Salvador	10 participantes, padres que viven en Quezaltepeque	Debate (única sesión)*: "La paz y las relaciones de familia"
Sesión 3. Debate grupal, adolescentes	10 de agosto de 2019	Apopa, San Salvador, El Salvador	30 participantes, adolescentes (tanto chicos como chicas) que forman parte de un grupo de teatro que vive en el municipio de Apopa	Debate (única sesión)*: "La vida en mi comunidad"
Sesión 4. Debate grupal, hombres jóvenes	11 de agosto de 2019	Soyapango, San Salvador, El Salvador	8 participantes, hombres en sus 20s que viven en una comunidad seleccionada de Soyapango	Debate: "¿Qué tan seguro me siento en mi comunidad?"
Sesión 5. Debate grupal, hombres jóvenes	16 de agosto de 2019	Soyapango, San Salvador, El Salvador	8 participantes, hombres en sus 20s que viven en una comunidad seleccionada de Soyapango	Debate: "Ser una víctima de la violencia"
Sesión 6. Debate grupal, hombres jóvenes	19 de agosto de 2019	Soyapango, San Salvador, El Salvador	8 participantes, hombres en sus 20s que viven en una comunidad seleccionada de Soyapango	Debate: "Soluciones para reducir la violencia armada en mi comunidad".

\*\* Esta fue una sesión única en la que los participantes discutieron su percepción de la comunidad, los problemas de seguridad y las soluciones a la violencia armada durante una sola sesión. Este fue diferente al grupo de Quezaltepeque, donde los participantes tuvieron más tiempo para discutir cada tema en sesiones separadas.

\*\* Ídem.





# Se busca AMENASA



*Cuando se le pidió que dibujara algo representativo de su comunidad, un muchacho de Guatemala dibujó a un pandillero que llevaba un arma con detalles precisos, dijo: “Quería dibujar a un pandillero que es buscado por la policía porque había matado a alguien y, como pueden ver, el arma tenía un silenciador”.*



**Dirección:**

Carronfoot, Thornhill, Dumfries,  
DG3 5BF, UK

**Correo Electrónico:**

latinamericadesk@halotrust.org

[www.halotrust.org](http://www.halotrust.org)